

Trabajo Fin de Máster

Análisis de las políticas familiares en España. Un estudio comparado de las distintas realidades autonómicas.

Autor

Pablo Redondo Mora

Directores

Dr. Pablo García Ruiz
Dr. Pau Marí-Klose

Facultad de Economía y Empresa
2017/2018

RESUMEN

Esta investigación analiza las prestaciones económicas de apoyo a las familias en el territorio español. Para ello, se han recogido y catalogado las ayudas económicas que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas ponen a disposición de las familias, siendo posteriormente sometidas a un análisis comparativo. Los resultados reflejan una amplia divergencia en los mecanismos y fórmulas empleados por las administraciones autonómicas para ofrecer protección a las familias, existiendo amplias desigualdades territoriales en la intensidad protectora. No obstante, se observa una tendencia común al estancamiento de los distintos sistemas autonómicos, que parecen mostrar resistencias a adaptarse a las necesidades del nuevo contexto sociofamiliar, siendo escasa la atención económica que reciben las necesidades derivadas de los nuevos riesgos sociales, y en particular, de las dificultades de conciliar la vida familiar con el empleo.

Palabras clave: nuevos modelos familiares, políticas familiares, conciliación de la vida familiar y laboral, corresponsabilidad familiar, desigualdad de género.

ABSTRACT

This research project analyses current economic allowances for family support within the Spanish territory. To this end, economic subsidies to families granted by the Spanish Central Administration and the autonomous communities have been compiled and classified, in order to be subsequently subjected to a comparative analysis. The results reflect a large divergence in the mechanisms and formulas used by regional authorities to provide protection to the families. Widespread territorial inequalities in terms of protective intensity were found. However, a common trend towards stagnation is observed in the different regional systems, which seem to be reluctant to adapt to the needs of the new socio-familiar framework. Overall, financial assistance received to tackle with new social risks is limited. The same applies, in particular, to the difficulties in reconciling professional and family life.

Key words: new family models, family policies, family and labour reconciliation, family co-responsibility, gender inequality.

ÍNDICE

1. Marco general del estudio.....	2
1.1. Introducción y justificación del tema de estudio.....	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Metodología	3
2. Estado de la cuestión y marco teórico.....	5
2.1. Sobre las familias contemporáneas	5
2.1.1. <i>Los cambios en la institución familiar</i>	5
2.1.2. <i>Los Nuevos Riesgos Sociales y sus consecuencias sobre las familias</i>	7
2.2. Sobre las políticas familiares.....	10
2.2.1. <i>El concepto de política familiar</i>	10
2.2.2. <i>La evolución de las políticas familiares en España</i>	12
3. Análisis de las políticas familiares de ámbito nacional	14
3.1. Concesiones de tiempo laboral para la atención a familiares.....	14
3.2. Servicios para atender las necesidades y demandas de los/las menores de edad	20
3.3. Recursos monetarios para el fomento de la conciliación	22
4. Análisis de las prestaciones autonómicas de apoyo a las familias	22
4.1. Las deducciones fiscales autonómicas destinadas al apoyo a las familias	22
4.2. Las transferencias monetarias autonómicas destinadas al apoyo a las familias	25
5. Discusión sobre el impacto de las políticas familiares por Comunidades Autónomas.....	27
6. Conclusiones y recomendaciones	41
7. Bibliografía.....	45
8. Anexos.....	50

1. Marco general del estudio

1.1. Introducción y justificación del tema de estudio

La institución familiar ha experimentado recientemente en España una profunda transformación simbólica y estructural. La realidad social de las familias españolas se encamina hacia la consolidación de una amplia variedad de modelos más plurales, democráticos e igualitarios, en concordancia con los valores de una sociedad que también aspira a serlo.

Sin embargo, los roles de género en el ámbito familiar están evolucionando de forma más parsimoniosa. Si bien las mujeres han adquirido nuevos roles sociales, continúan manteniendo la mayor parte de las responsabilidades familiares. Esto genera una sobrecarga de tareas que dificulta la conciliación de la vida familiar con otros ámbitos de la vida cotidiana, como el laboral. La respuesta de la sociedad a este problema ha generado una tendencia al retraso de la edad de maternidad y reducción de la natalidad.

El conflicto de roles que conlleva la maternidad desvela una necesidad de construir un contexto social en el que ser madre no suponga un inconveniente para desarrollar una vida laboral plena. Ante esta realidad, las administraciones públicas deben desarrollar políticas que contribuyan a generar contextos que resulten favorables a las familias. En este sentido, una de las principales medidas ofertadas por el Estado como apoyo a las familias son las prestaciones económicas. No obstante, la descentralización de las competencias del Estado en las administraciones autonómicas hace que encontremos una gran diversidad y variedad de medidas económicas entre los distintos territorios.

Ante las desigualdades territoriales en torno a la intensidad protectora de las políticas familiares, apenas se han llevado a cabo estudios comparativos que permitan conocer la realidad autonómica sobre las ayudas económicas de apoyo a las familias (Cantó, 2011). Es por ello que en esta investigación analizamos la articulación de las ayudas económicas a las familias llevada a cabo por cada una de las regiones con las políticas nacionales y las comparamos con las medidas desarrolladas en el resto de Comunidades Autónomas.

Así pues, esta investigación permite identificar y valorar las distintas fórmulas llevadas a cabo por las autonomías en la configuración de sus sistemas de apoyo económico a las familias y pretende facilitar el conocimiento y difusión de buenas prácticas entre Comunidades Autónomas.

1.2. Objetivos

El objetivo general de esta investigación es analizar las políticas económicas de apoyo a las familias llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas y valorar, a nivel general, su adaptabilidad a las necesidades sociales de las familias contemporáneas.

Este objetivo se materializa en la consecución de los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar y comprender los factores sociales que dificultan la conciliación personal, familiar y laboral.
2. Conocer la situación del conjunto de políticas familiares de carácter nacional y autonómico destinadas a prestar apoyo a las familias.
3. Comparar las medidas autonómicas y contrastarlas con las necesidades sociales de las familias.

1.3. Metodología

Para analizar el marco general de ayudas económicas de apoyo a las familias desarrolladas por las distintas administraciones territoriales desde una perspectiva comparada, hemos sistematizado todas las prestaciones económicas de apoyo a las familias disponibles a nivel estatal y en cada una de las 17 Comunidades Autónomas.

La información sobre las medidas de ámbito estatal ha sido obtenida de la *Guía de ayudas sociales y servicios para las familias* (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018). En cuanto a las Comunidades Autónomas, debemos distinguir entre dos fuentes de información secundarias en función de la tipología de la prestación económica. El manual práctico para la declaración de la renta en el ejercicio 2017 (Agencia Tributaria, 2018) nos ha permitido registrar todas las deducciones fiscales destinadas al apoyo a las familias existentes en cada una de las autonomías, detallando las condiciones de acceso y las cuantías monetarias de cada una de estas medidas. Sin embargo, no existe ningún tipo de catálogo que presente de forma unificada las transferencias monetarias de las distintas Comunidades Autónomas. Ante la ausencia de este recurso, hemos optado por elaborar un catálogo propio sobre las ayudas económicas destinadas a las familias por las distintas autonomías. De esta forma, hemos reducido la dispersión de la información sobre las prestaciones, unificándola en un único documento. Para ello, hemos complementado la información ya disponible sobre deducciones fiscales realizando una búsqueda de las prestaciones económicas territoriales en los portales y páginas web de cada uno de los organismos autonómicos que recogen los textos normativos que regulan las medidas objeto de estudio. En este sentido, la heterogeneidad en las formas de reunir y presentar la información por parte de las administraciones autonómicas, ha resultado ser una dificultad añadida, especialmente en aquellas cuyos portales web resultan menos intuitivos. Por lo tanto, ante las limitaciones presentadas por algunas de las fuentes de información consultadas, cabe la posibilidad de que alguna prestación autonómica en forma de transferencia monetaria no haya quedado registrada adecuadamente.

Una vez recogida la información sobre las ayudas territoriales de apoyo a las familias, hemos realizado unas tablas (anexos 1 y 2) agrupando las ayudas según el tipo de necesidad que pretenden cubrir y su población destinataria y contabilizando las Comunidades Autónomas en la que se presta cada una de las ayudas. En la tabla sobre deducciones hemos distinguido entre cuatro grupos: 1) infancia y familia, 2) mayores de 65 años, 3) discapacidad y enfermedad y 4) otros. En la tabla sobre transferencias monetarias, al contar con un menor número y variedad de ayudas, hemos distinguido entre: 1) infancia y familia y 2) discapacidad y enfermedad. Estas tablas nos han servido para mostrar la información de forma simplificada, distinguir las ayudas más comunes y facilitar, mediante una exposición sintética de las ayudas de cada autonomía, el manejo del catálogo de prestaciones a la hora de consultar la información detallada sobre cuantías y condiciones de acceso de las ayudas.

Tras reunir y clasificar la información sobre las prestaciones económicas, analizamos la configuración de la protección social a las familias en el marco autonómico. Para ello, hemos planteado cinco supuestos familiares y estudiado el nivel de cobertura que recibirían en cada una de las Comunidades Autónomas en función de sus características familiares específicas. Para plantear los distintos modelos a analizar, tenemos en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica de las distintas configuraciones familiares (Estrada *et al.*, 2018; Llano Ortiz, 2018) y los tipos de hogares más extendidos (INE, 2011).

Posteriormente, hemos contabilizado el número de prestaciones a las que cada uno de estos tipos de familias podría acogerse en cada una de las 17 Comunidades Autónomas. Finalmente, para facilitar el análisis comparativo de las distintas realidades autonómicas, hemos desarrollado un modelo de clasificación de las regiones por la intensidad protectora de sus prestaciones. Para calcular el grado de protección hemos tenido en cuenta el nivel de recursos económicos que la administración pone al servicio de las familias y el nivel de accesibilidad a estas ayudas. El nivel de recursos lo calculamos en función del número de prestaciones familiares existentes en cada región (P) y las cuantías, en euros, que éstas ofrecen (E). La accesibilidad la calculamos contabilizando el número de prestaciones generales (Pg), entendidas éstas como aquellas en las que las únicas condiciones de acceso son el tener al menos un hijo y encontrarse dentro del margen de renta exigido, y valorando si el límite de rentas que excluye del acceso a la prestación (R) es superior o inferior a la renta media de esta Comunidad Autónoma. De esta forma, podemos encontrar cuatro modelos de articulación de los recursos y cuatro formas de accesibilidad.

NIVEL DE RECURSOS

P + E +	P + E -
P - E -	P - E +

ACCESIBILIDAD

Pg + R +	Pg + R -
Pg - R -	Pg - R +

La construcción de estos modelos se establece valorando si los valores de P, E, Pg y R son positivos o negativos. Para valorar P, contabilizamos el número de medidas por cada autonomía y calculamos la mediana (6), de esta forma, las regiones que desarrollen 6 o más medidas obtendrán un valor positivo (+), las que estén posicionadas por debajo de 6 obtendrán un valor negativo (-). Para valorar E, analizamos la dispersión existente entre las cuantías de las prestaciones de cada región, y las que ofrecen cifras superiores obtienen una puntuación positiva y el resto una puntuación negativa. Pg se calcula de la misma forma que P, siendo en este caso 2,9 el valor de referencia. Y R se valora mediante el cálculo del porcentaje que la renta per cápita máxima permitida para acceder a las ayudas de una Comunidad Autónoma (o la media en el caso de que la renta varíe en función de la prestación) supone sobre la renta media por persona de dicha comunidad; así, siendo el valor de referencia la renta media per cápita, las comunidades que cuenten con un límite de acceso en función de rentas situado por encima de su renta media, obtienen una valoración positiva, y aquellas cuyos límites de acceso se sitúan por debajo de la renta media, obtienen una valoración negativa, pues cuentan con un límite de acceso muy restrictivo.

Estas valoraciones nos van a permitir determinar los niveles de recursos y accesibilidad. De esta forma, si, por ejemplo, las prestaciones de una Comunidad Autónoma han sido valoradas con P+ y E+, tendremos N+ (nivel de recursos altos), si P+ y E-, el resultado será Ni (nivel de recursos intermedio), y si P- y E-, obtendremos N- (nivel de recursos bajo), de forma igual calcularíamos la accesibilidad, teniendo en cuenta Pg y R. Como resultado de los cruces de valoraciones podremos obtener

distintos modelos, por ejemplo, “N+, A+”, “Ni, A+”, “N-, Ai”... De este modo, los cruces entre el nivel de recursos y el grado de accesibilidad determinará el nivel de protección. Cuando “+” se cruce con otro “+” o “i”, el nivel de protección será alto; cuando el cruce sea entre dos valores intermedios (i), el nivel de protección será medio; y cuando el cruce sea de “-” con otro “-” o “i”, el nivel de protección será negativo. Así, exponemos a continuación los distintos cruces posibles y los modelos y niveles de protección resultantes de cada uno de los cruces.

Nivel de recursos		Accesibilidad		Modelo	Nivel de protección
P	E	Pg	R		
+	+	+	+	N+, A+	ALTO
+	+	+	-	N+, Ai	ALTO
+	+	-	+	N+, Ai	ALTO
+	+	-	-	N+, A-	MEDIO
+	-	+	+	Ni, A+	ALTO
+	-	+	-	Ni, Ai	MEDIO
+	-	-	+	Ni, Ai	MEDIO
+	-	-	-	Ni, A-	BAJO
-	+	+	+	Ni, A+	ALTO
-	+	+	-	Ni, Ai	MEDIO
-	+	-	+	Ni, Ai	MEDIO
-	+	-	-	Ni, A-	BAJO
-	-	+	+	N-, A+	MEDIO
-	-	+	-	N-, Ai	BAJO
-	-	-	+	N-, Ai	BAJO
-	-	-	-	N-, A-	BAJO

2. Estado de la cuestión y marco teórico

2.1. Sobre las familias contemporáneas

2.1.1. Los cambios en la institución familiar

La institución familiar está experimentando una serie de cambios profundos que ponen de manifiesto la crisis de sus valores tradicionales. De esta forma, vemos cómo se van desintegrando algunos de los cimientos básicos de la familia patriarcal, tales como la estabilidad matrimonial (con la contención del conflicto conyugal), la sumisión de las mujeres a sus maridos, la reclusión de la mujer en el hogar o el trabajo reproductivo como destino natural de las mujeres (Alberdi, 1999: 385-386).

Estos valores tienden a ser sustituidos por otros más democráticos e igualitarios. Ello está induciendo a la consolidación de una sociedad plural en la que sus individuos se organizan en modelos familiares diversos. Así, podríamos destacar una mayor presencia de parejas (heterosexuales y homosexuales) que cohabitan sin estar institucionalizadas por el matrimonio, al igual que un mayor número de nacimientos fuera de éste; un incremento de separaciones y divorcios, así como de familias reconstituidas a partir de segundas nupcias (o sucesivas); o un aumento en la presencia y visibilización de las familias monoparentales y de los hogares unipersonales.

Y es que los cambios culturales e ideológicos que trajo consigo la transición, con una mayor modernización y acercamiento a los valores europeos, han transformado las formas de entender la familia, que ha pasado a ser concebida como un “asunto privado” (Cea D’Ancona, 2009: 9), lo que ha permitido su configuración desde la libertad individual de sus miembros. Paralelamente, la difusión de los principios de igualdad y tolerancia ha hecho posible que esta metamorfosis de la institución familiar se realice orientada hacia unas relaciones simétricas entre los miembros de las unidades familiares.

De esta forma, la sociedad española se encamina hacia la consolidación de modelos familiares más plurales, democráticos e igualitarios, en concordancia con los valores de una sociedad que también aspira a serlo. En este sentido, la mejora del nivel de vida, el incremento de la educación o los avances en la atención sanitaria resultan fundamentales para el desarrollo de los aspectos ideológicos y las aspiraciones sociales en las que se sostiene la configuración de los nuevos modelos familiares.

Entre estas nuevas formas de entender las familias, destacan algunos patrones comunes, tales como:

el individualismo, que antepone la autorealización personal a los intereses generales; la privacidad de la moral, que corre pareja a la progresiva secularización de la sociedad española; y la asimilación de los principios de igualdad y tolerancia ante la diversidad, acorde con la penetración de la democracia en los diferentes ámbitos de la convivencia social (Cea D’Ancona, 2009: 20).

No obstante, la evolución en torno al reparto de las responsabilidades y las cargas de trabajo reproductivo entre los miembros de las familias está siendo mucho más parsimoniosa. Pues si bien la mujer, con su empoderamiento y adquisición de nuevos roles sociales, ha sido la principal promotora de la desintegración del modelo de familia patriarcal, todavía continúa ostentando la mayor parte de la responsabilidad frente a las tareas del hogar y los cuidados familiares.

Y es que, si bien es cierto que la incorporación de las mujeres al mercado laboral se ha visto favorecida por los avances tecnológicos y los cambios culturales que han permitido reducir las exigencias de las tareas domésticas y familiares, las aspiraciones laborales de éstas continúan viéndose truncadas en muchas ocasiones por las cargas familiares. Es por ello que, ante la dificultad que supone el compatibilizar la vida familiar con el empleo cuando no se cuenta con el apoyo necesario, la respuesta de la mayoría de las mujeres españolas durante las últimas décadas ha llevado a un retraso de la edad de maternidad y a una disminución de la natalidad.

Si bien las dificultades que plantea la conciliación tienen una fuerte incidencia sobre la caída de la natalidad, no es el único factor explicativo de este fenómeno. Así, Inés Alberdi (2014) identifica el inicio de la reducción del tamaño de las familias en la separación entre sexualidad y reproducción, que, a su vez, tiene un doble origen, material e ideológico. La base material sería el desarrollo y difusión de anticonceptivos fiables y fáciles de usar. El fundamento ideológico lo aporta el feminismo, que reivindica el derecho de las mujeres a ejercer el control sobre su propio cuerpo y a disfrutar de la misma libertad sexual que los hombres. De esta forma, la libertad de las mujeres para controlar su maternidad no habría sido posible sin los anticonceptivos, ni aceptable sin el feminismo (Alberdi, 2014: 3).

Otro factor a tener en cuenta es la tardía emancipación juvenil. Y aunque la independencia de los jóvenes se ve condicionada por diversos factores y circunstancias, podemos determinar como una de sus causas principales la insuficiencia de políticas públicas y sociales para facilitar la salida de los jóvenes de su hogar de origen. Así, “las políticas de mercado laboral –los niveles salariales y sobre todo la estabilidad en el empleo– juegan un papel determinante [...], puesto que de ellas dependen las posibilidades de acceso al régimen de tenencia en propiedad” (Patón Casas, 2007: 548). También las políticas públicas de vivienda ejercen un fuerte impacto sobre la edad de emancipación. En este sentido, “los regímenes de propiedad de la vivienda, el peso relativo del alquiler o la extensión de la vivienda social aparecen como factores clave, explicativos en gran medida de las diferencias en cuanto a la edad de emancipación en los diferentes países de Europa” (Patón Casas, 2007: 548).

Por lo tanto, observamos cómo los cambios culturales e ideológicos, fuertemente ligados al surgimiento de nuevas formas de entender la familia, así como cuestiones laborales, económicas y de acceso a la vivienda, son factores que intervienen en el hecho de que las familias españolas tengan menos hijos. Así pues, podríamos distinguir los distintos factores que condicionan el descenso de natalidad en dos grupos en función de su naturaleza. Por un lado estarían los factores que tienen que ver con los cambios culturales que han llevado al surgimiento de nuevos valores y estilos de vida, visibles en los cambios de prioridades recogidos por I. Alberdi: “ser libre, hacer su vida, viajar, dejarse llevar, tener experiencias nuevas, pasarlo bien y disfrutar de ser joven” (2014: 19). Por el otro, se encontrarían las consecuencias derivadas de los Nuevos Riesgos Sociales que afectan a las familias y la insuficiencia de políticas públicas y sociales que respondan de forma óptima a estos riesgos sociales.

2.1.2. Los Nuevos Riesgos Sociales y sus consecuencias sobre las familias

Los Nuevos Riesgos Sociales son aquellos resultantes de los cambios demográficos, la transformación de los mercados de trabajo y los contextos sociales asociados con la transformación del orden postindustrial (Taylor-Gooby, 2004; Bonoli, 2007). Éstos plantean auténticos desafíos al Estado de Bienestar, especialmente debido a tres tendencias sociales: “el envejecimiento de la población, la transformación de los mercados de trabajo y los cambios en los valores sociales” (Equipo NorSpaR, 2015: 12).

El envejecimiento de la población

Respecto al primer desafío, el envejecimiento de la población, que tiene que ver con el incremento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad, implica, por el aumento del tamaño de la población anciana, una mayor demanda de cuidados y una fuerte presión económica para el Estado.

El envejecimiento puede afectar negativamente a la creación de empleo y los salarios, ya que serán necesarias contribuciones sociales más altas por parte de los trabajadores para cubrir las expectativas de bienestar de los ancianos. Las limitaciones financieras también pueden obligar a los gobiernos a reducir las pensiones públicas y fomentar la expansión de los sistemas privados como complemento a las pensiones estatales, lo que podría dejar a algunos segmentos de la población insuficientemente protegidos para afrontar los años de jubilación (Equipo NorSpaR, 2015: 12).

Pero además de las consecuencias financieras, el envejecimiento de la población también genera unas mayores necesidades de cuidados por parte de la población. En este sentido, las atenciones que las personas requieren en situaciones de discapacidad,

enfermedad crónica y durante la vejez, suponen un importante reto para el Estado de Bienestar. Y es que, en nuestro país, los cuidados a la dependencia apenas han estado contemplados por el sistema de bienestar, que gira en torno a una concepción “familista” según la cual, las políticas públicas dan por sentado que las familias deben asumir la provisión de bienestar a sus miembros (Esping-Andersen, 2002), siendo escasas las prestaciones que el Estado destina a dar apoyo a las familias.

Ante esta situación, la presencia de un familiar en situación de dependencia suele afectar al resto de miembros del hogar, especialmente al cuidador principal, generalmente mujer, que en ocasiones debe sacrificar sus ingresos y aspiraciones laborales al reducir, o incluso abandonar, su jornada laboral (Son *et al.*, 2011; Catalán y Garrote, 2012). Es por ello que los cuidados informales conllevan una alteración de los roles individuales de las personas cuidadoras, pues normalmente tienen que modificar sus hábitos de vida para poder asumir esta responsabilidad inesperada (Estrada *et al.*, 2018: 2). Además, este fenómeno se ve agravado por los cambios sociales y familiares mencionados anteriormente, que aumentan las dificultades para la prestación de cuidados cotidianos a familiares dependientes (La Parra, 2002; López y Fernández, 2013). Y, por otra parte, también hay que tener en cuenta que los cuidados informales ejercen un impacto nada desdeñable sobre la salud física y mental de las personas cuidadoras (López, Lorenzo y Santiago, 1999; Lee y Gramotnev, 2007).

Por lo tanto, observamos cómo el envejecimiento de la población tiene un impacto directo sobre el bienestar de las familias. Y es que éstas cuentan cada vez con una capacidad menor para hacer frente a los cuidados informales, que, a su vez, no garantizan la provisión de los servicios adecuados para el bienestar de las personas mayores.

Las transformaciones del mercado laboral

El segundo grupo de Nuevos Riesgos Sociales es el derivado de la transformación de los mercados de trabajo. En este sentido, los bajos salarios y la precariedad laboral tienen un fuerte impacto social, especialmente sobre los grupos socioeconómicos más vulnerables, como los jóvenes y las personas inmigrantes (grupos de los que depende directamente la fecundidad).

En algunos países, los jóvenes se enfrentan a grandes dificultades para alcanzar la independencia financiera, abandonar el hogar paterno, formar una pareja y/o para convertirse en padres (lo que fomenta el descenso de las tasas de natalidad). Los inmigrantes, que hace unos años acudían masivamente a los países occidentales atraídos por las oportunidades de empleo, han sido empujados a la economía informal en condiciones de alta inseguridad y precariedad (Equipo NorSparR, 2015: 13).

Y es que la crisis económica ha afectado a diversas dimensiones del bienestar social. Prueba de ello es que con el incremento del desempleo se han disparado los niveles de pobreza y de desigualdad. Ante esta situación, el Estado de Bienestar español se ha mostrado incapaz de corregir la desigualdad provocada por el mercado. Parte de esta incapacidad deriva de la propia configuración de la protección social en nuestro país, que delega en la familia gran parte de la responsabilidad de provisión del bienestar. Dicho de otra forma, sirviéndose de la fuerte institucionalización del matrimonio, la presencia de amas de casa a tiempo completo y las redes de apoyo intrafamiliares, los distintos gobiernos se han despreocupado por “garantizar mínimos de seguridad económica o de proporcionar servicios a grupos de población desprotegidos” (Moreno y Marí-Klose, 2016: 143). Así, se ha cargado a las familias con una responsabilidad de

sustento inafrontable ante la recesión económica, especialmente por los hogares más desprotegidos. Por ello, la configuración del sistema de protección social no sólo ha sido determinante en el fuerte aumento de la desigualdad, sino también en la estructura y perfil de esta desigualdad. “En España se han empobrecido los más pobres (los hogares situados en las dos, a lo sumo, tres primeras decilas de ingreso), abandonados a su suerte por un Estado que no tenía previstas políticas para dar respuesta al empeoramiento de sus condiciones de vida” (Marí-Klose, 2015a).

No obstante, lejos de menospreciar nuestro sistema de bienestar, es innegable que ha permitido atenuar los impactos sobre poblaciones afectadas por riesgos sociales como la ancianidad o la discapacidad, sin embargo, “otros riesgos han recibido menor atención o cobran un protagonismo inédito en los últimos años, como consecuencia de transformaciones económicas, demográficas y políticas” (Moreno *et al.*, 2014: 100). Hablamos, por ejemplo, de las políticas contra la pobreza infantil, las medidas orientadas a mejorar las oportunidades laborales y de acceso a la vivienda de los jóvenes o las iniciativas que tratan de promocionar el cuidado de los niños pequeños. Todas ellas se encuentran subdesarrolladas, especialmente si nos comparamos con otros regímenes de bienestar. La falta de desarrollo de estas políticas se traduce en la existencia de graves problemas de pobreza infantil, altas tasas de desempleo y/o precariedad laboral en la juventud, una intensa tendencia a la emancipación tardía, bajas tasas de fecundidad y elevadas tasas de abandono del mercado laboral de las mujeres tras dar a la luz (Moreno y Marí-Klose, 2016: 145), motivadas primordialmente por una profunda desigualdad de género en los ámbitos laboral y doméstico/familiar.

La evolución de los valores sociales

Por último, el tercer conjunto de Nuevos Riesgos Sociales a tener en cuenta es el que forman los derivados de la evolución de los valores sociales (individualismo, secularización, democratización de las relaciones sociales...). Estos valores han sido uno de los factores clave en la transformación de los modelos familiares comentados previamente. En este sentido, los cambios en las formas de entender la institución familiar han traído consigo nuevos problemas y necesidades sociales. Pero además, éstos se intensifican especialmente en un Estado de bienestar que, como el nuestro, se configura bajo una concepción tradicional de la familia. Es por ello que, en este sentido, el riesgo no sería la evolución de los valores sociales en sí mismo, sino, más bien, las tensiones y contradicciones producidas entre estos nuevos valores y un sistema que no parece gozar de la suficiente flexibilidad para adaptarse a un nuevo contexto sociocultural en el que la familia tradicional pierde protagonismo.

Tal vez, el caso en el que mejor se aprecie esta serie de dificultades para el bienestar de las familias sea el de la monoparentalidad. Y es que las familias monoparentales forman un modelo familiar profundamente marcado por la dimensión de género y las situaciones sociales de riesgo. Se trata de una forma de convivencia familiar en la que la mujer, en una proporción más elevada que el varón, ejerce solitariamente el liderazgo moral y material y asume cotidianamente el grueso de las labores y la responsabilidad diaria de la mayor parte de las cuestiones que afectan directamente a los hijos (Barrón, 2002). Como prueba de ello, algunos datos, como los ofrecidos por Save The Children (Sastre, 2015), muestran que la mayoría de familias monoparentales españolas están formadas por una mujer sola a cargo de su prole (82% de los casos). Además, es frecuente la asociación de esta modalidad de hogar con situaciones sociales de riesgo de

pobreza y/o de exclusión social (Barañano Cid y De la Paz, 1999), estado en el que se encuentra más de la mitad de los hogares monoparentales (53,3%) (Sastre, 2015).

En este sentido, el principal problema que sufren estas familias es la sobrecarga de trabajo del cabeza de familia. El progenitor que se queda al cargo de su prole (principalmente mujer) tiene que hacer frente en solitario a las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, haciendo todo ello compatible con sus otras actividades y obligaciones fuera del hogar. Esta situación constituye un problema para la madre sola, que, por lo general, pasa a encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica y social mayor a la de antes de la entrada en la monoparentalidad. De esta forma, la pobreza infantil se convierte en el principal riesgo al que se enfrentan estas familias.

Las consecuencias de estas sobrecargas familiares se agravan ante la ausencia de un adecuado servicio de apoyo al cuidado de los niños. Las madres solas no cuentan con las ayudas suficientes para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Ante estas circunstancias, encuentran serias dificultades para cuidar de sus hijos en la etapa preescolar, o, una vez escolarizados, atender sus enfermedades o cubrir los desajustes temporales entre jornada laboral y horarios y vacaciones escolares. Las familias monoparentales, por lo general, sólo poseen una vía de ingresos económicos en el hogar, y no suelen ser suficientes como para poder contratar servicios de cuidados en el mercado privado. Por lo tanto, ante la falta de medidas óptimas que faciliten la conciliación, muchas madres solas se ven obligadas a reducir su jornada laboral –con la consiguiente disminución de ingresos– o, incluso, a abandonar temporalmente el mercado de trabajo para poder atender las necesidades de sus hijos. De esta forma, la monoparentalidad genera una gran dificultad de inserción laboral. Y es que, una “sociedad organizada en torno al eje trabajo productivo que descuida lo que sucede en el espacio privado somete a todas las mujeres, pero en especial a las mujeres trabajadoras y/o que encabezan familias monomarentales, a peores condiciones sociales de vida” (Almeda *et al.*, 2016: 62).

Por todo ello, los Nuevos Riesgos Sociales ocupan un papel cada vez más relevante en los debates sobre la provisión de bienestar ante una situación de crecientes presiones globales y austeridad presupuestaria (Equipo NorSpaR, 2015: 14). Y es que, si no son abordados eficazmente, pueden acarrear fuertes impactos sobre la pobreza y la desigualdad. Porque, como hemos visto, las consecuencias de los Nuevos Riesgos Sociales repercuten severamente sobre las familias y la infancia. Es por ello que las políticas familiares resultan imprescindibles para paliar estos efectos.

2.2. Sobre las políticas familiares

2.2.1. El concepto de política familiar

Una política familiar es toda aquella que plantea “como un asunto común, que atañe a toda la ciudadanía, problemas que afectan a la gran mayoría de las unidades familiares e intenta darles una respuesta colectiva mediante la elaboración y aplicación de políticas públicas” (Flaquer, 2000: 7). En este sentido, las políticas familiares están compuestas por “un conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades derivadas de ellas” (Flaquer, 2000.: 12).

En cuanto a estas medidas, podemos distinguir entre: a) recursos monetarios, que pueden proporcionarse mediante transferencias monetarias o desgravaciones fiscales, b) servicios externos destinados a atender las necesidades y demandas de los menores de

edad u otros miembros de las familias que dependan de la provisión de atenciones y cuidados, y c) concesiones de tiempo para la atención, dentro del hogar, a familiares que requieran de cuidados, como son los permisos, las excedencias o las reducciones de la jornada laboral.

Así, las medidas de apoyo a las familias están destinadas a aliviar las cargas familiares y con ello evitar que éstas ocasionen perjuicios económicos, sociales y/o profesionales a los miembros más vulnerables de las unidades familiares.

El desarrollo de este tipo de medidas públicas orientadas a las familias ha tenido que ver con el surgimiento de riesgos y necesidades sociales ligados a las profundas transformaciones estructurales relacionadas “con la evolución del mundo de la economía y del trabajo y con el aumento de la incorporación más o menos masiva y rápida de las mujeres al mercado laboral” (Flaquer, 2000: 22). La aparición de estos Nuevos Riesgos Sociales genera situaciones como el incremento de madres solas haciéndose cargo del cuidado de sus hijos, con las dificultades y riesgos socioeconómicos que ello conlleva, la aparición de nuevas formas de pobreza o el desarrollo de nuevas necesidades educativas. Y estas necesidades requieren respuestas colectivas.

No obstante, tradicionalmente, en los países del Sur de Europa, el Estado ha mostrado un escaso apoyo a las familias a la hora de proveer de bienestar a sus miembros, dando por supuesta la autosuficiencia de los hogares para proporcionar cuidados personales y apoyo material. Esta despreocupación por la intervención en el ámbito familiar ha generado un escaso desarrollo de la política familiar. De esta forma, se ha reforzado un modelo sustentado por “la sobreexplotación de los recursos familiares y, muy especialmente, de aquellos proporcionados por las mujeres abocándolas a «soluciones imposibles», con importantes consecuencias sobre el bienestar personal y colectivo” (Salido y Moreno, 2009: 282).

Ante la perpetuación del confinamiento de la mujer al ámbito privado mediante el sustento de los roles de género tradicionales, no es de extrañar que las primeras medidas orientadas a las mujeres en la España democrática se articulasen en torno a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y la consolidación de su condición de ciudadanas de pleno derecho (Salido y Arriba, 2005; Valiente, 1995; Bustelo, 2004). No obstante, la política familiar ocupó durante las dos primeras décadas de la democracia española un papel irrelevante, reforzándose “indirectamente el papel de los arreglos privados en la organización del bienestar colectivo, fundamentalmente en el ámbito de la familia” (Salido y Moreno, 2009: 282).

Aunque con las políticas destinadas a la conciliación no siempre se consigue una justa distribución de roles entre mujeres y hombres, pues “bajo la etiqueta de «políticas de conciliación» se pueden situar concepciones muy diversas sobre el papel de la mujer en el mercado y en el hogar” (Salido y Moreno, 2009: 283), así como del papel que debe ocupar el Estado en la provisión de bienestar social. Y es que ningún tipo de intervención pública es neutra.

Situados en el campo familiar, considerado como área de intervención pública, debemos aceptar que toda política familiar incide sobre las formas de vida y comportamientos familiares e individuales y vehicula inevitablemente, explícita o implícitamente, preferencias políticas o normativas con respecto a tal o cual modelo de familia. Esta normatividad deriva del hecho de que, en la vida y en las experiencias reales, las políticas familiares no afectan simplemente al individuo ante algún riesgo

social como la enfermedad o el desempleo, sino que afectan a un grupo social institucionalizado como es la familia. Y esta institución es configurada por un sistema de relaciones sociales complejas entre sexos y generaciones, caracterizadas por desigualdades profundas y relaciones de dependencia y dominación. Por ello, el componente normativo que toda política familiar comporta hace que las opciones ideológicas y políticas al respecto puedan ser bien dispares y hasta incluso opuestas (Flaquer, 2000: 23).

Así pues, la ideología parece ser un factor fundamental para determinar los posicionamientos políticos a la hora de entender cuál debería ser el papel de la familia en la provisión del bienestar. En este sentido, los sectores más conservadores de la sociedad continúan abogando por un reforzamiento indirecto del papel central del varón en el sustento del hogar (Salido y Moreno, 2007: 112). Un ejemplo de ello sería el sistema de prestaciones públicas español, cuyo nivel de recursos depende de la cuantía de las aportaciones realizadas previamente. De esta forma se sobreprotege a los trabajadores estables de larga duración (tradicionalmente el padre de familia), mientras se desprotege o infraprotege a un amplio segmento de ciudadanos con trayectorias laborales más precarias e inestables. También “las medidas universales pueden (...) ser instrumentos de una política conservadora, al no distinguir en función de la renta” (Salido y Moreno, 2007: 113).

Por lo tanto, no sólo importa que se desarrollen políticas de apoyo a las familias, sino también bajo qué planteamientos son concebidas y mediante qué procedimientos se aplican. Y es que las políticas, por muy loables que resulten sus intenciones, pueden acarrear consecuencias inesperadas. Así, por ejemplo, un enfoque erróneo puede llevar a las políticas de conciliación a convertirse en un mecanismo de reproducción de la desigualdad de género, ofreciendo soluciones precarias al déficit de bienestar de las mujeres y las familias (Bustelo y Peterson, 2005).

2.2.2. La evolución de las políticas familiares en España

A la luz de lo anterior, podemos determinar que los cambios en las estructuras políticas pueden actuar como impulso de transformaciones sociales. De esta forma, en España, la democratización ha propiciado “la visibilización y el reconocimiento de tendencias sociales que se anuncian bastante antes de la finalización de la dictadura, con el afianzamiento progresivo de valores más democráticos en las relaciones interpersonales dentro de los hogares, que alejan a los españoles del autoritarismo dominante en la esfera política” (Iglesias de Ussel y Marí-Klose, 2011: 1002).

En este sentido, podríamos situar la antesala del actual modelo español de políticas familiares en el régimen franquista (1936 – 1975). Durante esta etapa se pretendía solucionar la “crisis de la familia” provocada por las reformas en las leyes de familia efectuadas durante la Segunda República (Meil, 2006). De esta forma, ante la preocupación y rechazo por la concepción liberal de la vida familiar que se había introducido en la legislación durante la Segunda República, se desarrolló una política familiar fuertemente sustentada por valores religiosos que actuó como instrumento para prevenir “los efectos corrosivos de la pobreza en la vida familiar y, en particular, de la incorporación de la mujer a la fuerza laboral” (Marí-Klose, 2015b: 109). Se fomentó el matrimonio y la natalidad, hasta el punto de que se otorgaban premios a las familias con mayor número de hijos (Roigé, 2011). En definitiva, durante este período, las políticas familiares fueron el núcleo duro de un Estado de bienestar subdesarrollado centrado en el mantenimiento del modelo de varón sustentador patriarcal.

Sin embargo, con la llegada de la Transición, las políticas familiares se convierten en campo residual de la política pública, frente al desarrollo de otras políticas sociales. La profunda intervención que el régimen franquista y la Iglesia Católica habían efectuado sobre la familia española de mediados del siglo XX crea en el imaginario colectivo de la época una fuerte relación entre políticas familiares y dictadura. Como consecuencia de dicha asociación, durante casi dos décadas, la actividad política democrática opta por la pasividad e inacción en el campo de las políticas de apoyo a las familias. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1990, con la emergencia de nuevos estilos de vida, riesgos y necesidades sociales, comienza a ser evidente la urgencia por desarrollar políticas públicas orientadas a favorecer a las familias. De esta forma, las políticas familiares vuelven a tomar relevancia en la agenda política.

Un primer factor que propició cambios en este sentido fue la *europeización* progresiva de la política social en España (Guillén y Álvarez, 2004). Y es que durante la década de 1990 se consolida una nueva perspectiva académica sobre los retos del “modelo social europeo”, que se materializa en ideas y soluciones políticas planteadas desde la Unión Europea para modernizar la prestación pública. De esta forma, el compromiso que mostró España por seguir las directrices europeas resulta trascendental en el cambio de orientación política en cuestiones que guardaban relación con temas de género y familiares.

En 1996, la llegada del Partido Popular al Gobierno marca el comienzo de una nueva fase en la que la política familiar adquiere un nuevo auge. Anteriormente, las escasas políticas dirigidas a las familias se habían desarrollado e implementado desde las Comunidades Autónomas, sin la existencia de un marco normativo conjunto básico a nivel estatal. En diciembre de 1997 se alcanza el primer acuerdo parlamentario sobre política familiar. Este acuerdo se materializó mediante la elaboración de un Plan Integral de la Familia que perseguía abordar de manera global los problemas de las familias españolas (Salido y Moreno, 2007: 107). Así, entre las medidas más relevantes de este período se encuentran un nuevo enfoque sobre el permiso por baja parental y una serie de beneficios fiscales orientados a dar apoyo a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años (Marí-Klose, 2015b: 126).

En oposición a los objetivos perseguidos por las políticas de la etapa conservadora (orientadas al fortalecimiento de la capacidad de las familias para cumplir con sus funciones y responsabilidades), con la llegada en 2004 del Partido Socialista se da una mayor intensificación de las políticas favorables a las familias, integrándolas “en un programa más amplio que aspiraba a avanzar en igualdad de género a través de la regulación de las relaciones laborales (...), una estrategia nacional de lucha contra la violencia doméstica y campañas educativas para promover nuevos valores de género” (Marí-Klose, 2015b: 127).

Estas medidas incluyeron iniciativas para favorecer la autonomía residencial de los jóvenes, promover el empleo femenino y la conciliación de trabajo y vida familiar (a través de una expansión de escuelas infantiles y cuidado de los ancianos), estimular la natalidad y ayudar a las familias jóvenes a través de una transferencia monetaria por nacimiento (Salido y Moreno, 2009; Ferrara, 1996; Marí-Klose y Moreno-Fuentes, 2013). Los programas de permiso parental se revisaron y ampliaron. En este sentido, a los padres de bebés recién nacidos se les concedió un permiso de quince días (con la promesa, que nunca se hizo realidad, de aumentar el período de licencia a cuatro semanas en 2013) y los criterios de elegibilidad para las madres que trabajan se relajaron para que un mayor número de mujeres pudieran beneficiarse de ellos. (Marí-Klose, 2015b: 126-127).

Sin embargo, el desarrollo de estas políticas no llegó a durar el tiempo suficiente como para lograr su consolidación, pues con el estallido de las crisis de 2008 se desbarataron los recientes programas que se estaban desarrollando para hacer frente a los Nuevos Riesgos Sociales.

Por otra parte, debemos tener en cuenta la descentralización de las competencias administrativas y jurídicas en la atención a las necesidades de las familias, que se distribuyen en tres niveles: administración general del Estado, Comunidades Autónomas y corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones). De esta forma, las ayudas a las familias se encuentran financiadas, impulsadas y desarrolladas por distintos organismos públicos en distintos territorios y a distinto nivel institucional. Debido a que este tipo de políticas son variables según Comunidades Autónomas y municipios, pueden existir desigualdades territoriales en torno a la satisfacción de las necesidades y demandas familiares.

En este sentido, las políticas de apoyo a las familias se convirtieron en un campo de acción privilegiado por muchas Comunidades Autónomas. A lo largo de los años, muchas introdujeron varias formas de tratamiento preferencial para determinados tipos de familias (transporte, elección de las escuelas, acceso a prestaciones de vivienda...), transferencias de ingresos dirigidas a hogares y familias (ayudas directas a familias, subsidios por nacimiento o adopción, deducciones fiscales...) y recursos dedicados a ampliar los servicios sociales ofrecidos a nivel regional (Cantó *et al.*, 2012). No obstante, a partir de 2011, con la reducción de gasto impuesta por el Gobierno estatal, la mayoría de gobiernos regionales han aplicado severos recortes en las políticas favorables a las familias.

3. Análisis de las políticas familiares de ámbito nacional

Las políticas de apoyo a las familias desarrolladas por la Administración General del Estado se pueden diferenciar por tres grupos. En ellos encontramos a) las concesiones de tiempo laboral, b) los servicios educativos para los menores de edad y c) las prestaciones económicas para el fomento de la natalidad y la conciliación. En este capítulo, vamos a describir cada una de estas ayudas, centrándonos en valorar su adaptabilidad a las necesidades sociofamiliares.

3.1. Concesiones de tiempo laboral para la atención a familiares

Al ser la legislación laboral una competencia estatal, las concesiones de tiempo laboral destinadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral quedan recogidas por el Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015, de 23 de octubre). En este sentido, la normativa laboral contempla tres tipos de medidas destinadas a dicho fin: permisos, reducciones de jornada y excedencias.

Los permisos laborales de maternidad y de paternidad son prestaciones temporales que proporcionan tiempo a los progenitores para que puedan atender a sus hijos durante las primeras semanas o meses de vida. Durante este período de baja se cobra una prestación económica que se encuentra ligada a una cotización previa. En este sentido, cuanto más alto sea el porcentaje cobrado en relación al sueldo durante la baja de maternidad o paternidad, menor será el coste de oportunidad de tener hijos y por lo tanto, previsiblemente, mayor efecto positivo se tendrá sobre la fecundidad (Gauthier y Hatzius, 1997). En el caso de España, el permiso de maternidad consta de una duración de dieciséis semanas, existiendo la posibilidad de transferir hasta diez semanas al padre en el caso de que ambos progenitores trabajen. Durante este período, la retribución

económica percibida es del 100% de la base reguladora. Además, una vez realizada la reincorporación al puesto de trabajo, la madre tiene derecho a un permiso por lactancia de 1 hora diaria, manteniendo el 100% de su salario habitual y hasta que el/la menor de edad cumpla los 9 meses de vida.

En el caso del permiso por paternidad, el padre tiene derecho a la suspensión de su contrato durante cinco semanas ininterrumpidas. A esta suspensión se le puede sumar hasta un máximo de diez semanas por transferencia de la madre, siendo la retribución del 100% de la base reguladora.

Por otra parte, también existen permisos destinados a proteger la salud de las madres y sus hijos/as en caso de riesgo durante el embarazo o riesgo por lactancia natural.

TABLA 1. Principales permisos por nacimiento y cuidado de hijos/as.

MOTIVO DEL PERMISO	DURACIÓN	RETRIBUCIÓN
<i>Maternidad</i>	16 semanas ¹ (10 transferibles al padre)	Subsidio del 100% de la base reguladora
<i>Paternidad</i>	5 semanas ²	Subsidio del 100% de la base reguladora
<i>Lactancia</i>	1 hora diaria o 2 fracciones de ½ hora ³	100% del salario
<i>Riesgo durante el embarazo</i>	Hasta que desaparezca la imposibilidad de reincorporación o se inicie el permiso por maternidad	Subsidio del 100% de la base reguladora
<i>Riesgo por lactancia natural</i>	Hasta que el/la lactante cumpla 9 meses	Subsidio del 100% de la base reguladora

Fuente: elaboración propia con información del Estatuto de los Trabajadores: art. 37.4, 45.1, 48.4, 48.7 y 48.8.

Para acogerse a un permiso laboral por maternidad o paternidad, la persona interesada debe estar laboralmente ocupada. Por lo tanto, para analizar el uso de estos permisos debemos tener en cuenta las tasas de ocupación del período estudiado, en nuestro caso 2017⁴. Así, al consultar los datos de ocupación laboral del cuarto trimestre de 2017 en la Encuesta de Población Activa (INE), observamos que el número de personas ocupadas por sexo era de 10.339,2 miles de hombres frente a 8.659,1 miles de mujeres, por lo que la tasa de ocupación masculina era un 9% superior a la femenina. En este sentido, al encontrarse laboralmente ocupados un mayor número de hombres que de mujeres, podríamos pensar que el número de permisos de paternidad disfrutados en

¹ En caso de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, la duración del permiso se amplía en 2 semanas por cada hijo/a a partir del segundo/a. También es ampliable 2 semanas adicionales en el caso de que al hijo/a nacido/a se le reconozca una discapacidad de grado igual o superior al 33%.

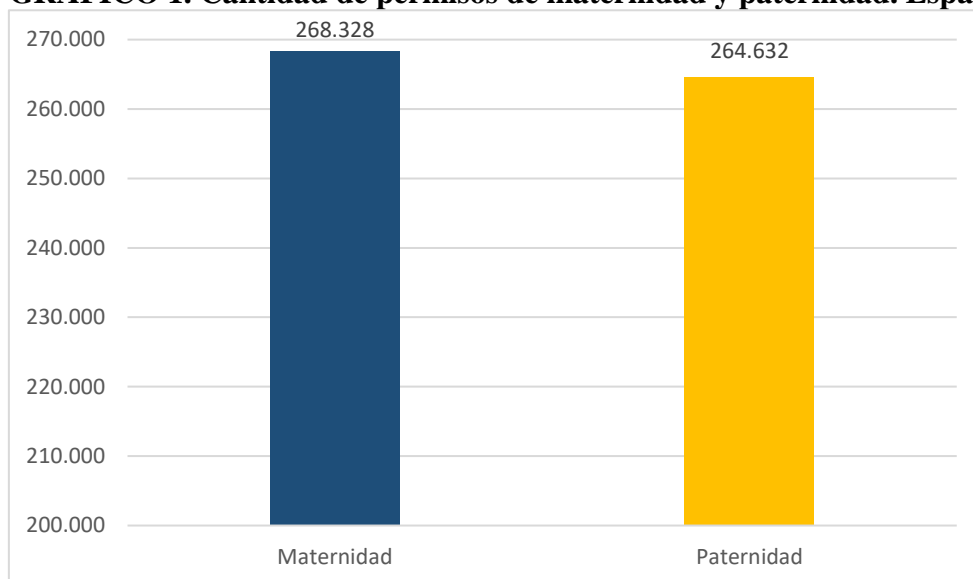
² Esta suspensión es independiente del disfrute de compartido del permiso de maternidad. En caso de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, la duración del permiso se amplía en 2 días por cada hijo/a a partir del segundo/a.

³ En caso de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, la duración del permiso se incrementará proporcionalmente.

⁴ Se selecciona el 2017 por ser el año al que pertenecen los datos más recientes sobre los permisos de maternidad y paternidad en España.

2017 debería ser superior al de maternidad. Sin embargo, como se observa en el gráfico 1, el número de madres y de padres que en 2017 se acogieron a dichos permisos es similar, siendo ligeramente superior (1,4%) el disfrute de permisos de maternidad.

GRÁFICO 1. Cantidad de permisos de maternidad y paternidad. España, 2017.



Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

No obstante, debemos tener en cuenta que el permiso de maternidad no está concebido para el disfrute exclusivo de la madre, pues contempla la posibilidad de transferir al padre 10 semanas de las 16 totales. Sin embargo, en la práctica, esta medida es disfrutada casi en exclusiva por las madres. Prueba de ello es que en 2017 tan sólo se transfiriese a los padres un 1,8% de los permisos de maternidad (INSS).

Y el problema aquí está en que, si bien los padres también cuentan con un permiso de paternidad, como ya hemos comentado, éste es tan sólo de 5 semanas⁵, frente a las 16 semanas del permiso de maternidad, por lo que lo único que facilitan estos permisos es un alivio temporal de las cargas laborales para que las madres puedan dedicarse en exclusiva al cuidado de sus hijos/as durante los 4 primeros meses. ¿Pero qué sucede tras este período de tiempo? El resultado es bastante conocido, como veremos a continuación, un amplio número de madres renuncian a sus aspiraciones laborales, reduciendo su jornada laboral, y con ello su nivel adquisitivo, o incluso abandonando el mercado de trabajo, para dedicarse al cuidado de sus hijos.

Esto se debe, por una parte, a que “el sistema de transferibilidad existente en España reproduce patrones de comportamiento tradicionales” (Elizalde *et al.*, 2015: 127), manteniendo una concepción clásica de la institución familiar y los roles que cada uno de sus miembros debe desempeñar. Por la otra, a que el entorno laboral y las características del empleo presentan demasiadas dificultades para que los hombres puedan acceder a las licencias parentales con seguridad.

⁵ La ampliación del permiso de paternidad a 5 semanas se efectúa en 2018, por lo que los datos sobre permisos disponibles hacen referencia a permisos de 4 semanas, que es el tiempo del que se disponía en 2017.

Por ello, para reducir esta desigualdad, sería necesario “introducir elementos normativos que, como en el caso de las cuotas, contrarresten las presiones del contexto laboral” (Lapuerta, 2013: 51). También la homogeneización de las licencias, igualando los permisos de paternidad a los de maternidad, podría contribuir a impulsar una mayor participación masculina, lo que armonizaría el reparto de responsabilidades de cuidados y aliviaría las actuales cargas domésticas y familiares que recaen sobre las mujeres.

Por otra parte, como ya habíamos anunciado, la reducción de jornada laboral es otra de las medidas aplicables para facilitar la conciliación. La legislación laboral española garantiza a las personas trabajadoras el derecho a acogerse a una reducción de jornada para el cuidado de hijos/as menores de 12 años, de familiares dependientes o de hijos/as menores de edad con enfermedad grave. No obstante, excepto en el último caso, en el que se asegura una retribución económica del 100% de la base reguladora, el acogerse a esta medida supone la renuncia a una parte sustancial del salario.

TABLA 2. Reducciones de jornada laboral por cuidados familiares.

MOTIVO DE REDUCCIÓN DE JORNADA	DURACIÓN	RETRIBUCIÓN
<i>Cuidado de menores de 12 años</i>	Hasta que el/la menor cumpla 12 años	NO
<i>Cuidado de familiares dependientes</i>	Mientras duren las causas que motivan la dependencia	NO
<i>Cuidado de hijo/a menor con enfermedad grave</i>	Durante el tiempo de hospitalización y tratamiento de la enfermedad, o hasta que el menor cumpla 18 años	100% de la base reguladora

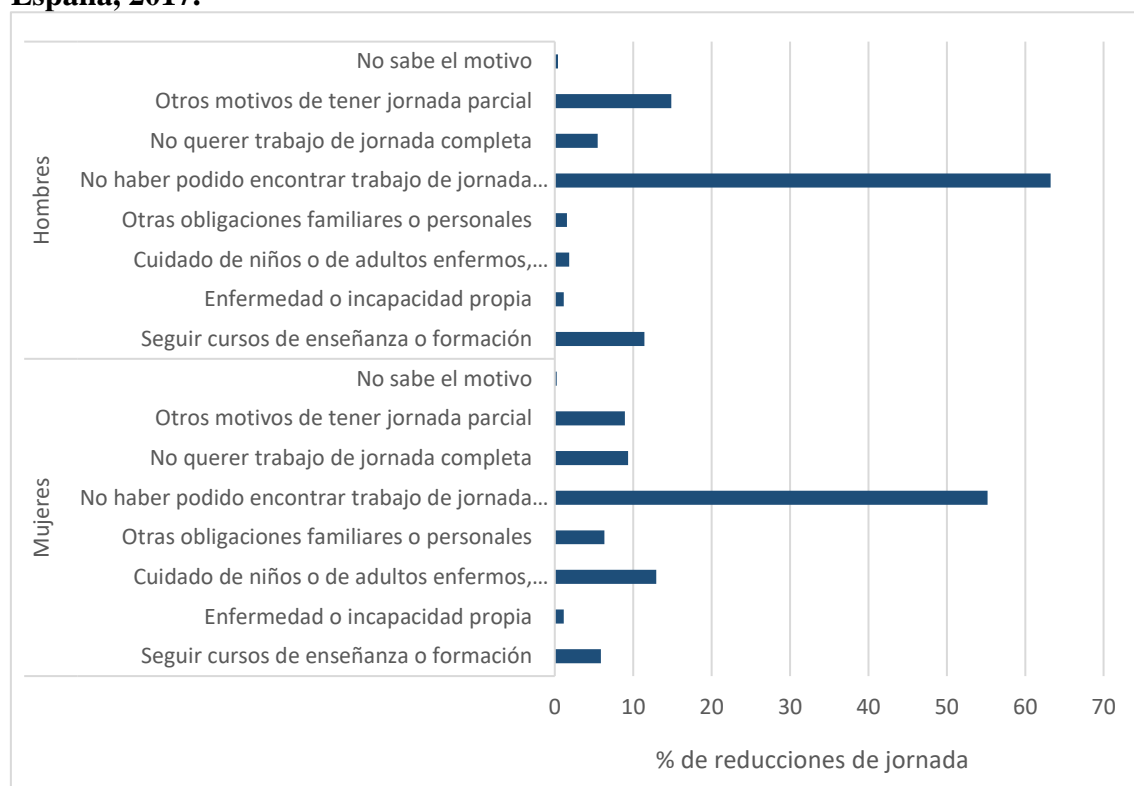
Fuente: elaboración propia con información del Estatuto de los Trabajadores: art. 34.8, 37.6 y 53.4 b.

Al analizar el acogimiento a reducciones de jornada laboral realizando una distinción por sexo, observamos de nuevo una profunda desigualdad de género en el uso de esta medida. En este caso, si en 2017 el número de hombres que se encontraban acogidos a una jornada laboral reducida fue de 733,3 (en miles), la cifra de mujeres que estaban en esta misma situación asciende a 2.072,1 (en miles), un 23,9% de las 8.659,1 (en miles) que estaban laboralmente ocupadas en el cuarto trimestre. Es decir, del total de personas que en 2017 se encontraban acogidas a una reducción de jornada laboral, el 73,9% eran mujeres.

Distinguiendo entre los diferentes motivos de la reducción de jornada por sexo (Gráfico 2), podemos ver cómo en ambos casos el principal motivo es no haber podido encontrar trabajo de jornada completa, siendo éste el motivo para un 63% de los hombres y para un 53% de las mujeres. Pero las principales diferencias se aprecian a partir del segundo motivo, pues si entre los hombres predominan otros motivos (no especificados) de tener jornada parcial (15%), entre las mujeres lo hace el cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores (13%). Y si el tercer motivo de la reducción de jornada para los hombres es seguir cursos de enseñanza o formación (11%), para las mujeres es no querer trabajo de jornada completa (9%), voluntad que puede estar condicionada por la perpetuación de una percepción social del trabajo fuertemente influenciada por los roles de género tradicionales en los que el trabajo principal de la unidad familiar (a tiempo completo) queda reservado al hombre, siendo las funciones principales de la mujer las asociadas al mantenimiento del hogar y los

cuidados familiares (difícilmente realizables en solitario con una jornada laboral a tiempo completo).

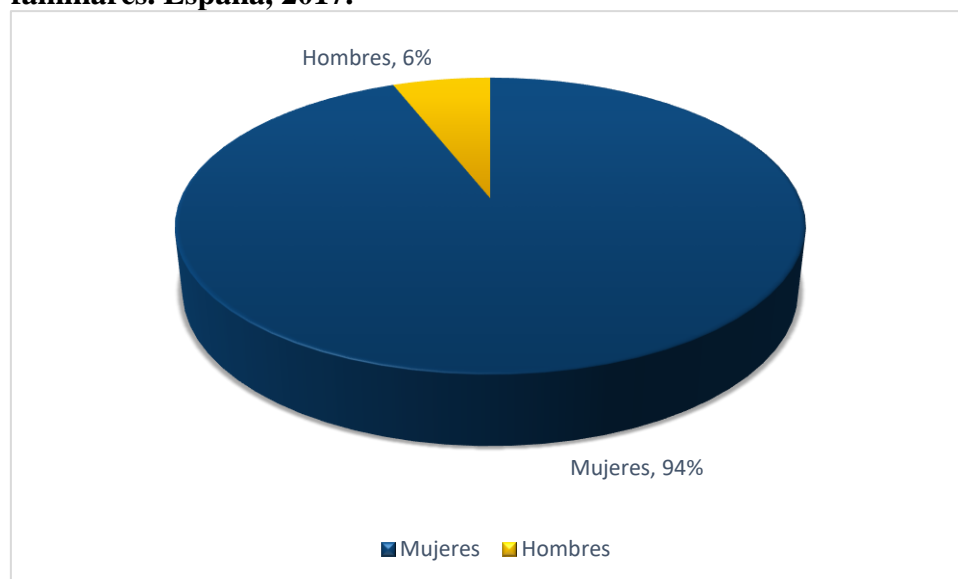
GRÁFICO 2. Comparación del motivo de la reducción de jornada por sexo. España, 2017.



Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

En este sentido, si analizamos el porcentaje de mujeres y de hombres que en 2017 se encontraban acogidos a una reducción de jornada para poder compatibilizar el trabajo con labores de cuidados u otras obligaciones familiares (gráfico 3), observamos que el 94% de las personas que optaron por esta medida de conciliación son mujeres.

GRÁFICO 3. Distribución por sexo de reducciones de jornada por obligaciones familiares. España, 2017.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

Por lo tanto, consideramos que el actual modelo de empleo a tiempo parcial existente en nuestro país, que se encuentra profundamente feminizado, actúa como mecanismo de reproducción de la desigualdad de género, sustentando “un modelo de especialización de género, en el que las mujeres son las cuidadoras principales y aportan ingresos secundarios o complementarios” (Baizán *et al.*, 2013: 185). Además, si bien en los países nórdicos y los Países Bajos el empleo a tiempo parcial puede resultar una buena oportunidad profesional, pudiendo suponer un fomento de la fecundidad de las mujeres con altos niveles educativos, en España esto resulta prácticamente inviable, debido a las condiciones de precariedad que suelen caracterizar a este tipo de empleo (Baizán *et al.*, 2013: 185).

Finalmente, la tercera de las medidas de concesión de tiempo laboral para atender a familiares que se contempla en la legislación laboral española es la de la excedencia. En este sentido, cualquier persona que se encuentre trabajando tiene derecho a solicitar una excedencia que le permita ausentarse de su puesto de trabajo durante un periodo de hasta 3 años si es para el cuidado de hijos/as menores de edad, o de un máximo de 2 años si es para cuidar de un/una familiar dependiente. En ambos casos, esta medida no contempla retribución económica alguna durante el periodo de tiempo en el que dicha persona se encuentre en excedencia laboral.

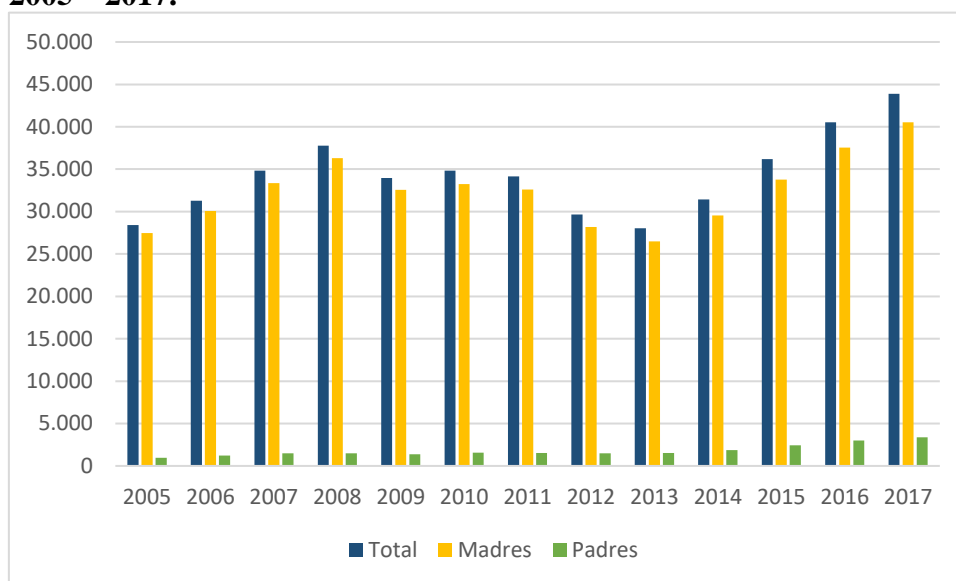
TABLA 3. Excedencias por cuidados familiares.

MOTIVO DE LA EXCEDENCIA	DURACIÓN	RETRIBUCIÓN
<i>Por cuidado de hijo/a</i>	Hasta 3 años (posibilidad de fraccionarlo)	NO
<i>Por cuidado de familiar dependiente</i>	Hasta 2 años	NO

Fuente: elaboración propia con información del Estatuto de los Trabajadores: art. 46.3.

Respecto a esta medida de conciliación de la vida familiar y laboral, (gráfico 4) podemos destacar que la excedencia laboral es el recurso de conciliación menos empleado, pues en 2017 se encontraban acogidas a él 43.899 personas, frente a las 532.960 que disfrutaron de un permiso de maternidad o paternidad y las más de 281.700 que se encontraban acogidas a una reducción de jornada para el cuidado de familiares. Seguramente, uno de los principales factores que explicaría el reducido uso de esta medida es la ausencia total de ingresos por, al menos, una de las partes de la unidad familiar, lo que genera una situación que en muchos hogares resulta insostenible. No obstante, si bien el uso de este recurso disminuyó durante los años más severos de la recesión económica, en los que se registraron las mayores cifras de desempleo y mayor precariedad laboral, desde 2014 lleva experimentando un paulatino incremento, superando en 2016 las cifras más altas previas a la crisis, las de 2008. Sin embargo, al igual que sucede con las medidas analizadas previamente, se observa una amplia brecha de género en el uso de este recurso, pues el 92% de las personas que en 2017 se encontraban acogidas a una excedencia laboral para el cuidado de hijos/as eran mujeres, frente a un 8% de hombres.

GRÁFICO 4. Evolución de excedencias por cuidado de hijos/as por sexo. España, 2005 – 2017.



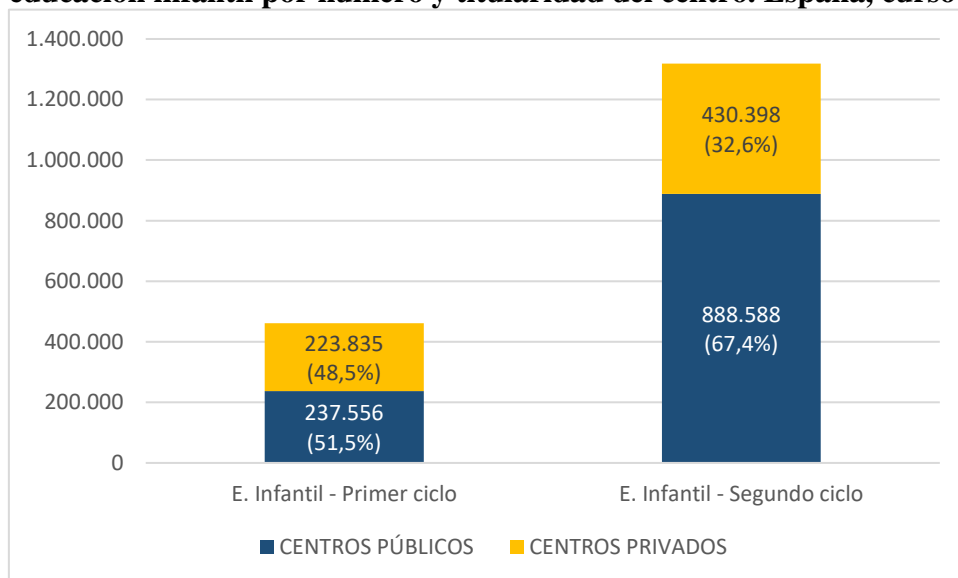
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

3.2. Servicios para atender las necesidades y demandas de los/las menores de edad

Las escuelas infantiles de 0 a 3 años son “una de las estrategias de cuidado colectivo más desarrolladas y efectivas para apoyar el derecho de los padres a trabajar y a dar soporte al modelo de familia igualitaria” (Elizalde *et al.*, 2015: 128). En este sentido, en España, la disponibilidad de plazas en estas escuelas tiene un efecto positivo sobre la fecundidad (Baizán, 2009). No obstante, si bien en el año 2008 se dio un impulso a esta medida a través del Plan de Impulso a la Educación Infantil (Educa3), con la previsión de crear 300.000 plazas, con la llegada de la crisis, el programa fue cancelado en el año 2012, habiendo creado sólo 71.000 de las plazas previstas.

En este sentido, durante el curso escolar 2016 – 2017, se ocuparon 237.556 plazas de educación infantil de titularidad pública, una cifra muy lejana a las 888.588 plazas públicas ocupadas por alumnos de segundo ciclo de educación infantil.

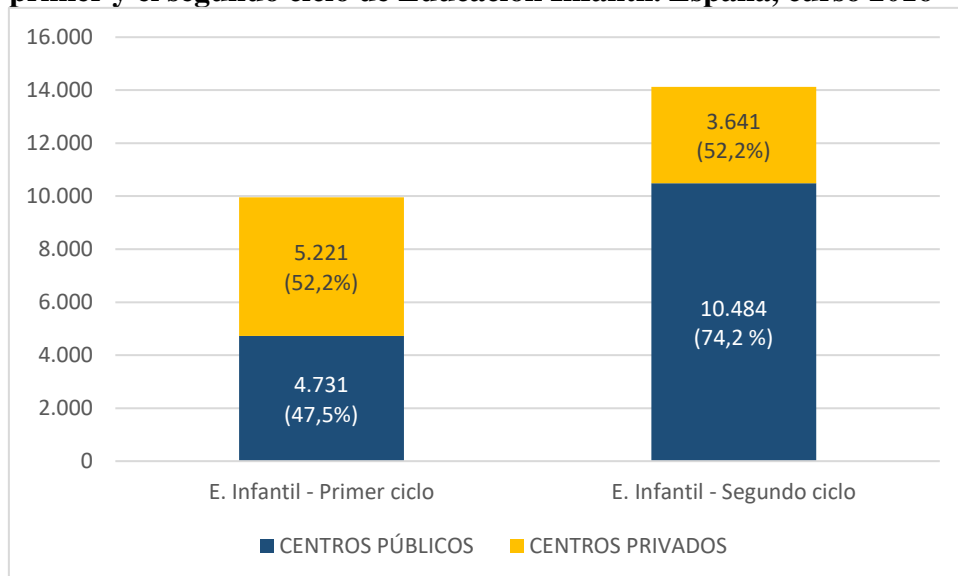
GRÁFICO 5. Comparación de alumnos matriculados en primer y segundo ciclo de educación infantil por número y titularidad del centro. España, curso 2016 – 2017.



Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Y es que, si realizamos una comparación entre la oferta pública y privada en ambos ciclos educativos, observamos (Gráfico 6) cómo, mientras que en el segundo ciclo de educación infantil el 74,2% de los centros son de titularidad pública, en el primer ciclo la oferta de centros públicos es un 5% inferior a la de privados. Esta insuficiencia de centros públicos en el primer ciclo de educación infantil es compensada con una fuerte presencia de centros privados. De esta forma, si bien en el segundo ciclo los centros privados suponen el 25,8% del total, en el primer ciclo son el 52,5%.

GRÁFICO 6. Comparación entre el número de centros públicos y privados en el primer y el segundo ciclo de Educación Infantil. España, curso 2016 – 2017.



Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

3.3. Recursos monetarios para el fomento de la conciliación

Finalmente, otra de las medidas para el fomento de la fecundidad y facilitación de la conciliación son las prestaciones económicas. Como adelantábamos antes, éstas pueden ser en forma de deducciones fiscales o por transferencias monetarias. Respecto a la primera modalidad, en España, las mujeres trabajadoras con un menor de 3 años a su cargo tienen derecho a una deducción de 1.200 € sobre el IRPF. No obstante, esta medida, al estar vinculada a la situación laboral, plantea algunas limitaciones. En cuanto a la modalidad de transferencias monetarias, existió entre 2007 y 2010 una prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción (conocida como *cheque bebé*), que otorgaba a las familias españolas un pago de 2.500 € por cada hijo nacido o adoptado. Sin embargo, este recurso desapareció con las primeras medidas de austeridad aplicadas tras la llegada de la crisis. Respecto al impacto de estas medidas, aunque habitualmente suelen venir acompañadas por el debate planteado sobre sus detractores acerca del posible desincentivo que puede suponer para la participación de la mujer en el mercado laboral, pueden (y deben) diseñarse para que esto no ocurra (Gustavsson y Stafford, 1994). Y, según afirman Baizán *et al.*, es previsible que este tipo de políticas tengan una influencia más positiva en los niveles de fecundidad de las mujeres con niveles educativos inferiores (2013: 186).

Actualmente, las únicas transferencias económicas a las familias que contempla la Seguridad Social son por parto o adopción múltiple; parto o adopción en familias monoparentales, numerosas o en los casos de madres con un grado de discapacidad del 65% o superior; o por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

A pesar de las escasas modalidades de prestaciones familiares contempladas por la Seguridad Social, debemos tener en cuenta que en España existen tres niveles administrativos responsables de financiar, organizar y activar las ayudas y servicios sociales: la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. En este sentido, la mayoría de Comunidades Autónomas cuentan con políticas familiares propias que complementan a las desarrolladas por la Administración General del Estado.

4. Análisis de las prestaciones autonómicas de apoyo a las familias

Las políticas económicas de ayuda a las familias llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas se desarrollan mediante dos tipos de medidas: deducciones fiscales y transferencias monetarias. En este capítulo vamos a describir el marco general de cada uno de estos tipos de prestaciones.

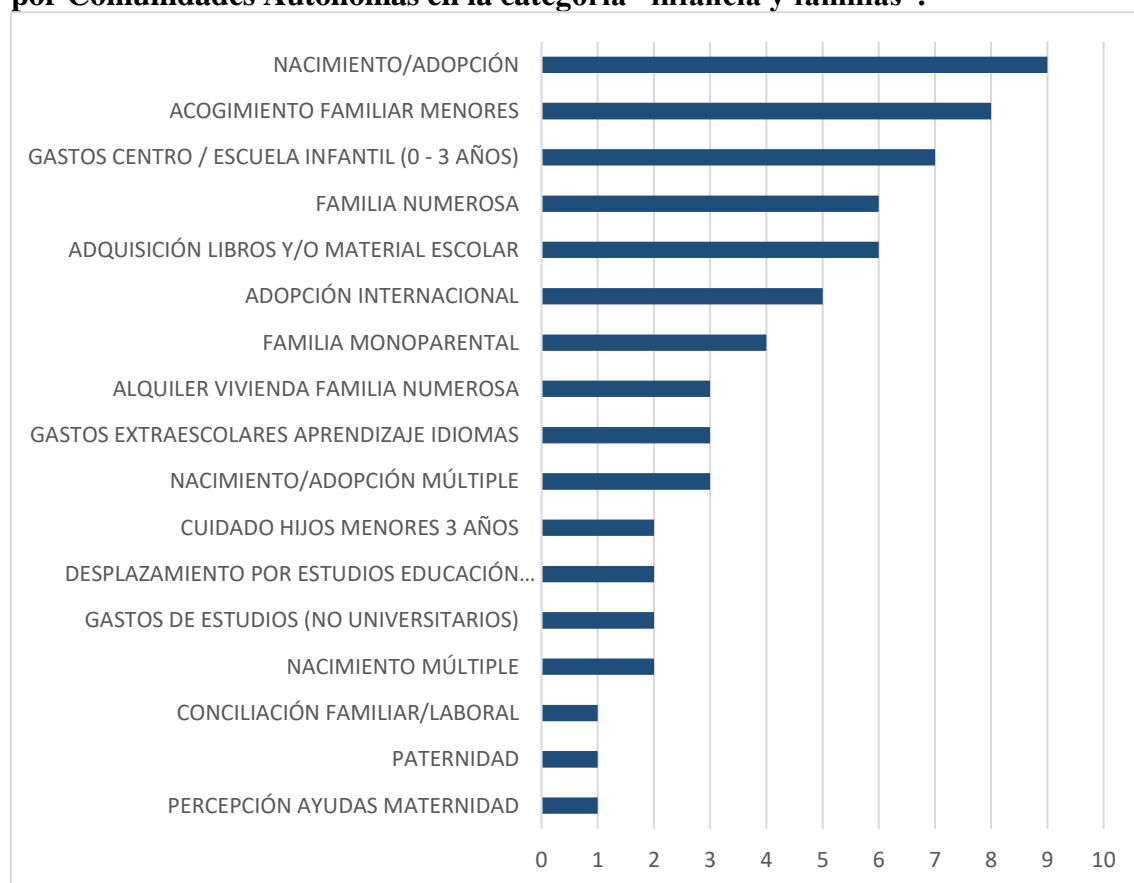
4.1. Las deducciones fiscales autonómicas destinadas al apoyo a las familias

En primer lugar nos centramos en las deducciones fiscales. Este tipo de medidas supone en torno al 80% de las 162 ayudas registradas entre todas las Comunidades Autónomas. Para facilitar su análisis, las hemos codificado en función de la necesidad que pretenden atender y agrupado en cuatro categorías en función de la población destinataria: “infancia y familias”, “mayores de 65 años”, “discapacidad y enfermedad” y “otros” (Anexo 1).

Al estar analizando las medidas orientadas específicamente al apoyo a las familias, nos encontramos con que la categoría “infancia y familias” recoge la mayoría de estas

ayudas. Tal y como se observa en el gráfico 7, la ayuda más extendida dentro de esta categoría es la deducción por nacimiento o adopción de hijos/as: aplicada en nueve Comunidades Autónomas (Canarias, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra). Las cuantías de esta ayuda sufren amplias variaciones, oscilando desde 100 €, en Castilla-La Mancha, hasta 710 € en Castilla y León, siendo la cuantía media de 345,38 €. Además, excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la cantidad de la ayuda es invariable, en el resto de Comunidades Autónomas en las que se ofrece dicha deducción, la cuantía es ascendente en función del número de hijos/as que forman la unidad familiar en la que se produce el nacimiento o adopción. Esta deducción también cuenta con complementos, como es el caso del incremento de la cuantía por partos o adopciones múltiples (Castilla – La Mancha, Galicia y Madrid), discapacidad del/la menor nacido/a (Canarias y Castilla y León) o nacimiento o adopción en un municipio inferior a 5.000 habitantes (Castilla y León y Galicia). En cuanto a las condiciones de acceso, también observamos amplias variaciones en la renta máxima permitida para acceder a dicho recurso, que oscilan desde los 7.519,59 € anuales (correspondientes al IPREM), en Navarra, hasta los 39.000 € (correspondiente a la suma de las bases imponibles general y del ahorro en tributación individual), en Canarias.

GRÁFICO 7. Principales deducciones fiscales destinadas al apoyo a las familias por Comunidades Autónomas en la categoría “infancia y familias”.



Fuente: elaboración propia.

Además, otras Comunidades Autónomas también cuentan, de forma más restringida, con deducciones por nacimiento o adopción. Una de ellas es la deducción por adopción internacional, que se repite en cinco Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón,

Asturias, Comunidad de Madrid y Navarra). Otras cinco CC.AA. (Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana) cuentan con una deducción exclusiva por partos o adopción múltiples, excluyendo en el caso de Aragón y Extremadura la adopción. También existen deducciones por nacimiento o adopción de tercer/a hijo/a y sucesivos/as, nacimiento o adopción de primer/a o segundo/a hijo/a en poblaciones menores de 10.000 habitantes (ambas en Aragón) y por nacimiento o adopción de hijo/a con discapacidad (en la C. Valenciana).

Por otra parte, la segunda principal medida es la deducción por acogimiento familiar de menores, aplicada en ocho Comunidades Autónomas (Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana). Respecto a la cuantía de la ayuda, entre la mayoría de CC.AA. no existen amplias diferencias, pues éstas oscilan entre 250 € y 300 €, no obstante, existen dos CC.AA. que sí se diferencian del resto: Castilla – La Mancha (500 €) y Comunidad de Madrid (600 €). Además, en estas dos CC.AA. se incrementa la cuantía proporcionalmente en función del número de menores que el/la contribuyente haya acogido previamente. En cuanto a la accesibilidad a la deducción, en todas las CC.AA. se exige una convivencia con el/la menor en acogida de un mínimo de 183 días en el período impositivo. Si el tiempo de convivencia es menor, en cuatro de éstas CC.AA. se reduce la deducción a la mitad si se superan los 90 días, y en una de ellas se prorratea por los días de convivencia. Por otra parte, algunas CC.AA. limitan el acceso a la deducción en función de las rentas, este es el caso de Castilla – La Mancha, Comunidad de Madrid (las dos que ofrecen mayores cuantías) y Comunidad Valenciana, estableciéndose un límite de 12.500 € anuales (en declaración individual) en la primera y de unos 25.000 € anuales en las dos siguientes.

La tercera ayuda más común es la deducción por gastos de guarderías, centros o escuelas infantiles (0 - 3 años), presente en siete CC.AA. (Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana). En todas estas CC.AA. la deducción es de un 15% de las cantidades satisfechas, excepto en Extremadura, que es de un 10%. No obstante, cada Comunidad Autónoma establece cuantías máximas a deducirse, oscilando estas entre los 220 € y 400 € anuales. En cuanto a la accesibilidad de la medida, volvemos a observar diferencias entre CC.AA., pues en La Rioja, que posee el límite más restrictivo, se establece la renta máxima en 18.030 € anuales (en declaración individual), frente a los 39.000 € anuales que se establecen en Canarias.

En cuanto a los modelos familiares que por su tipología pueden presentar un mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social, observamos que en seis CC.AA. se contemplan deducciones específicas a familias numerosas (Principado de Asturias, Canarias, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana), y en cinco a familias monoparentales (Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra). En el caso de las deducciones a familias numerosas, exceptuando el Principado de Asturias (505 €), en el resto de CC.AA. las cuantías se sitúan entre los 200 € y los 300 € para la categoría general, siendo el doble para las familias numerosas de categoría especial. Además, cuatro CC.AA. contemplan incrementos para las familias numerosas compuestas por al menos una persona con un grado de discapacidad del 65% o superior. Respecto a la accesibilidad, se aprecian desigualdades entre CC.AA., pues los límites en las rentas se sitúan entre 18.000 € anuales y 39.000 € (ambos en declaración individual). Además, las familias numerosas también cuentan con otras deducciones específicas para este modelo familiar, como es

la deducción por alquiler de vivienda habitual para familias numerosas (Islas Baleares, Cataluña y Extremadura) o por nacimiento/adopción del tercer hijo/a y sucesivos/as (Aragón), que da derecho a la consideración de familia numerosa.

Respecto a las deducciones a familias monoparentales, mientras que en Canarias es de 100 €, en el Principado de Asturias y la Comunidad Valenciana es de 300 €, quedando contemplada en ésta última una categoría especial a la que se puede aplicar una deducción de 600 €. Respecto a la accesibilidad por rentas, la Comunidad Valenciana es la más restrictiva, estableciendo el límite en 25.000 € (correspondiente a la suma de la base liquidable general y la base liquidable del ahorro), frente al límite de 39.000 € de Canarias. Además, cabe destacar que en el caso de la Comunidad Valenciana no se realiza distinción entre familia monoparental y numerosa respecto a este tipo de deducción, aplicándose a ambas las mismas cuantías y condiciones.

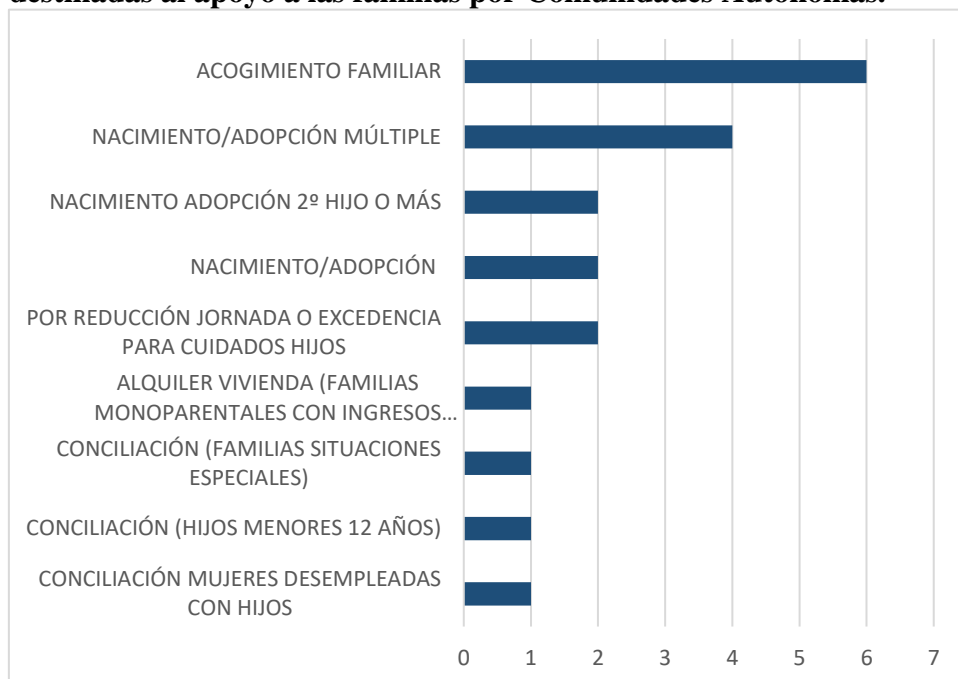
Finalmente, algunas CC.AA. contemplan deducciones que no se recogen en otras. Es aquí donde encontramos las medidas destinadas al fomento de la corresponsabilidad, como la deducción por paternidad (Castilla y León), aplicada en el caso de disfrute de un permiso de paternidad. También las hay por percepción de ayudas de maternidad, por conciliación del trabajo con la vida familiar (ambas en la Comunidad Valenciana) o para aliviar los gastos ocasionados por el cuidado de los hijos (distintas deducciones aplicadas en: Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco).

4.2. Las transferencias monetarias autonómicas destinadas al apoyo a las familias

Centrémonos ahora en analizar las ayudas familiares en forma de transferencias monetarias. Entre el total de ayudas desarrolladas por las Comunidades Autónomas, tan sólo cerca de un 20% adoptan la forma de transferencias monetarias, frente al 80% de deducciones. También la variedad de este tipo de ayudas es muy inferior, pues si, según nuestra codificación, podemos contabilizar hasta 54 tipos de ayudas distintas en forma de deducción fiscal, tan sólo encontramos 23 en forma de transferencia monetaria.

Tal y como se observa en el gráfico 8, entre estas medidas, la que se adopta por más Comunidades Autónomas es la prestación económica por acogimiento familiar de menores, que se repite en seis regiones (Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana). El importe económico de estas prestaciones experimenta variaciones considerables entre Comunidades Autónomas, pues si en la Región de Murcia la prestación por acogimiento de carácter general es de 120 € mensuales, en la Comunidad Valenciana asciende a 14 € al día, lo que es equivalente a 420 € mensuales (mes de 30 días). Los casos de Cataluña y Galicia son los más peculiares, pues la prestación por acogimiento familiar queda incluida en una prestación más amplia que también incluye nacimiento y adopción, por lo que en estos casos, la ayuda consiste en un pago anual que describiremos junto al resto de prestaciones por nacimiento o adopción. Además, en algunas de estas CC.AA. (Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) también se contemplan incrementos de esta prestación por circunstancias como acogimientos de urgencia, especiales, temporales en familia ajena, en familias monoparentales o discapacidad del/la menor de edad acogido/a. En el Principado de Asturias también se ofrece una prestación por acogimiento familiar en familia extensa y en la Comunidad Valenciana para la financiación de los gastos de asistencia médica producidos respecto a personas menores de edad acogidas.

GRÁFICO 8. Principales ayudas en forma de transferencias monetarias destinadas al apoyo a las familias por Comunidades Autónomas.



Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, también existen prestaciones económicas por nacimiento o adopción, presentes en tres Comunidades Autónomas (Cataluña, Extremadura y Galicia). Pero esta ayuda presenta peculiaridades en cada una de las regiones. En Cataluña consiste en una ayuda de 650 € para familias (de tres miembros) con rentas anuales inferiores a 16.000 € (el límite se incrementa proporcionalmente en función del número de miembros de la familia), que puede verse incrementada a 750 € en el caso de las familias numerosas que se encuentren dentro de los límites fiscales establecidos. En Extremadura está destinada a nacimientos y adopciones en poblaciones de menos de 3.000 habitantes, siendo de 1.400 € por el primer hijo, 500 € el segundo y 1.000 € el tercero, siempre y cuando las rentas familiares anuales sean inferiores a 19.362 € (para una familia de 2 miembros, incrementándose el límite proporcionalmente en función del número de miembros de la familia). Finalmente, las mayores prestaciones se otorgan en Galicia, donde, la Tarxeta Benvida da derecho a una prestación de 1.200 € por nacimiento o adopción y, además, en el caso de que las rentas familiares sean inferiores a 22.000 € anuales, la ayuda es ampliable al segundo y tercer año de vida del menor en 600 € cuando se trate del primer hijo, 1.200 € cuando sea el segundo y 2.400 € el tercero.

En este sentido, en algunas Comunidades Autónomas, aunque no existen ayudas por nacimiento o adopción en general, sí las hay por nacimiento o adopción de segundos hijos y sucesivos. Este es el caso de Cantabria, que destina un mínimo de 400 € para rentas familiares inferiores a 42.000 € (incrementándose la prestación a 600 € y 900 € para niveles de rentas inferiores), 1.000 € en municipios de menos de 3.000 habitantes y 1.500 € cuando el nacimiento otorgue la condición de familia numerosa; y de Extremadura, que otorga 500 € por el segundo hijo y 1.000 € por el tercero y sucesivos, siempre y cuando la renta familiar anual sea inferior a 19.362,09 € en el caso del segundo hijo y 22.589,10 € cuando se trate del tercero (incrementándose el límite de rentas proporcionalmente para el cuarto y sucesivos).

Lo mismo sucede con las prestaciones por nacimiento o adopción múltiples, presentes en cuatro Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria y País Vasco). En este caso volvemos a encontrar profundas desigualdades por regiones. En este sentido, Aragón establece un mínimo de 300 €, destinado a rentas familiares inferiores a 11.400 €, y un máximo de 1.200 €, dirigido a las rentas familiares inferiores a 4.570 € (existiendo cuantías intermedias en función de una escala de rentas). Por otra parte, el País Vasco establece un mínimo de 2.000 €, independientemente de la renta, que se incrementa progresivamente en función de las rentas familiares y el número de hijos resultantes del parto o la adopción. También Andalucía cuenta con una prestación generosa en este sentido, pues ésta consiste en un pago anual de 1.200 € durante tres años por 2 hijos resultantes de un mismo parto o adopción, 2.400 € por tres, 3.600 € por cuatro y 4.800 € por cinco o más, siendo el nivel máximo de renta familiar establecido de 45.117,54 €.

5. Discusión sobre el impacto de las políticas familiares por Comunidades Autónomas

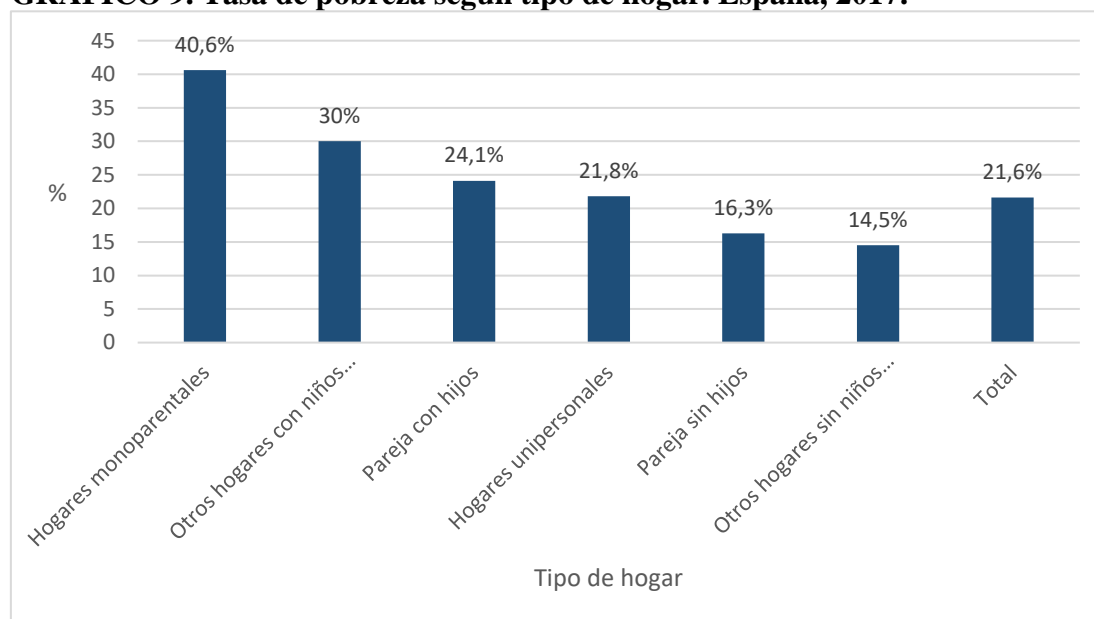
Una vez dibujado, de forma general, el contexto de las ayudas económicas de apoyo a las familias a nivel autonómico, podemos realizar un análisis más detallado que nos permita conocer algunos aspectos como cuáles son los perfiles familiares que suscitan un mayor interés en el ámbito de la protección a las familias, qué Comunidades Autónomas se encuentran a la vanguardia en la protección de cada uno de estos grupos, qué distintas formas de aplicar estas ayudas observamos entre los distintos territorios, etc.

Para realizar este análisis, planteamos cinco familias hipotéticas con unas características determinadas y estudiamos cuáles serían las ayudas que podrían percibir en base a su configuración familiar según la Comunidad Autónoma en la que residan. De esta forma, observamos qué autonomías tienen un conjunto de medidas económicas más favorables a las familias.

Para plantear los cinco supuestos familiares sobre los que se va a fundamentar nuestro análisis, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, cuáles son los modelos familiares más vulnerables socioeconómicamente. En este sentido, según reflejan los datos del índice AROPE sobre la tasa de pobreza según tipo de hogar (gráfico 9), los tipos de hogares más vulnerables socioeconómicamente son en los que hay menores de edad. Esto nos permitirá determinar si la protección recibida es proporcional a su vulnerabilidad. Esta lista está encabezada por las familias monoparentales, otros hogares con niños dependientes y los hogares formados por parejas con hijos. No obstante, si bien esta clasificación nos permite justificar la relevancia de contemplar a las familias monoparentales en nuestro análisis por ser las que presentan una mayor tasa de pobreza, no nos permite distinguir si entre las familias formadas por parejas con hijos son más vulnerables las numerosas o las no numerosas, ni qué papel juegan las familias con un menor de edad con discapacidad en el grupo de otros hogares con niños dependientes, por lo que debemos tener en cuenta un mayor número de variables. En este sentido, consideramos importante comenzar analizando la protección a los hogares formados por una pareja con uno o dos hijos por ser el modelo familiar más extendido, al existir, según el Censo de Población y Vivienda (INE, 2011), 5.114.364 hogares bajo esta estructura familiar. Continuaremos estudiando cómo es la protección a las familias numerosas, por ser el modelo que, entre todas las CC.AA., cuenta con un mayor número de medidas específicas. Prestaremos especial atención a las familias monoparentales por

ser las que presentan una mayor tasa de pobreza (gráfico 9). Por último, también nos centramos en estudiar las prestaciones a las familias en las que hay un menor de edad con discapacidad, así como en las que convive una persona mayor dependiente, pues el desarrollo de cuidados informales en el ámbito familiar, que tiende a recaer especialmente sobre las mujeres, puede ocasionar dificultades para la conciliación personal, familiar y laboral de las personas cuidadoras, además de un deterioro sobre su propia salud (Morris, 2001; García, Mateo y Maroto, 2004; Masanet y La Parra, 2009; Estrada *et al.*, 2018).

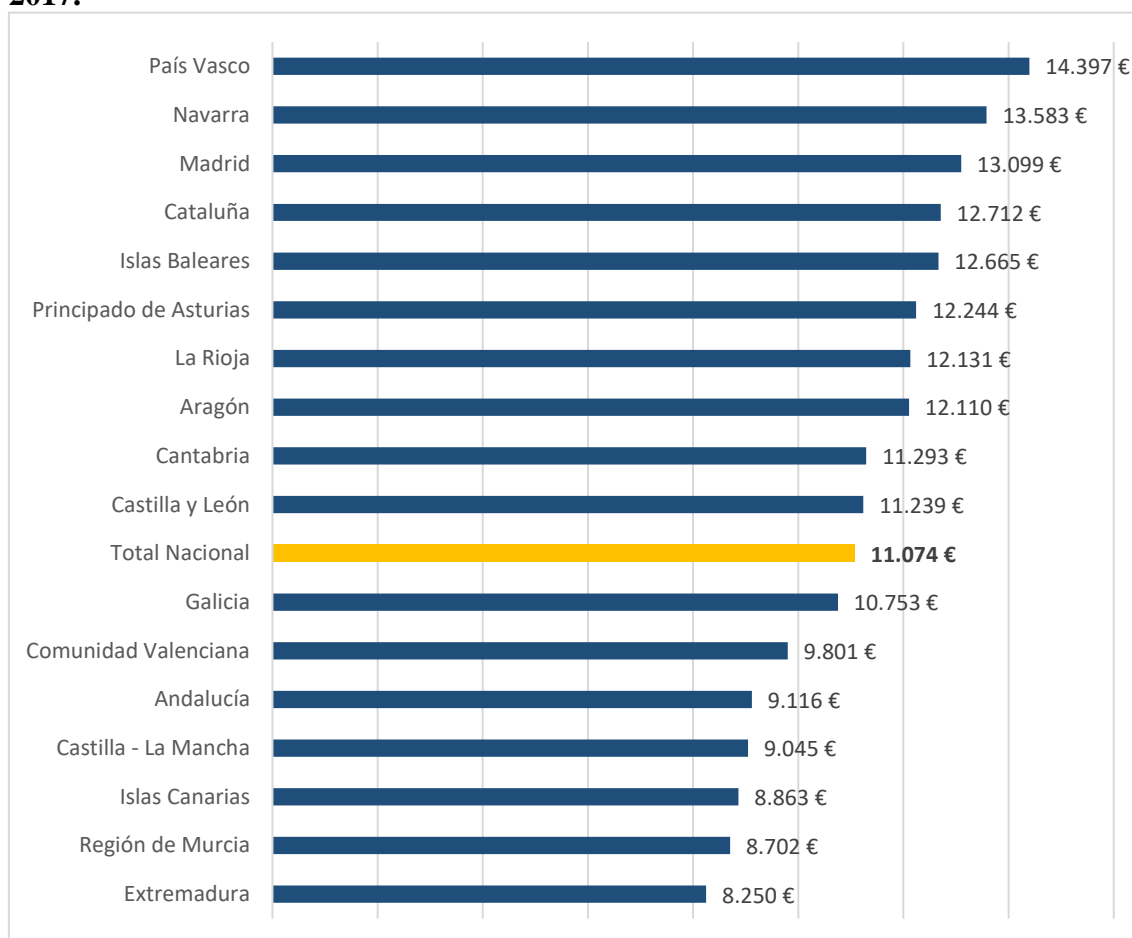
GRÁFICO 9. Tasa de pobreza según tipo de hogar. España, 2017.



Fuente: J. C. LLANO ORTIZ (2018): *El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2017*. Madrid: EAPN – España.

Una vez determinados los supuestos familiares en los que se va a sustentar nuestro análisis, debemos tener en cuenta la renta media por persona en cada de una de las Comunidades Autónomas. Como se observa en el gráfico 10, existen amplias diferencias en las rentas medias per cápita de las diferentes Comunidades Autónomas, por lo que no podemos valorar de la misma forma la renta exigida como criterio de accesibilidad a una ayuda en una autonomía y en otra. Por ejemplo, el perfil de las personas que accederían a una prestación destinada a la población con una renta inferior a 12.000 € sería distinta en Extremadura, donde la renta media por persona se sitúa en 8.250 € anuales, que en País Vasco, donde la renta media por persona supera ampliamente a la nacional (11.074 €) al situarse en 14.397 € anuales. Por lo tanto, en lugar de tener en cuenta la renta límite que da acceso a la ayuda en términos absolutos, tendremos en cuenta su relación porcentual respecto a la renta media por persona autonómica.

GRÁFICO 10. Renta media por persona por Comunidad Autónoma. España, 2017.



Fuente: INE. Encuesta de condiciones de vida.

Comenzamos nuestro análisis con las ayudas destinadas a las familias de 1 o 2 hijos. Entre este conjunto de medidas observamos que si, según nuestra catalogación (tabla 4), la mayor variedad de ayudas se concentra en el grupo de medidas destinadas a la conciliación, con 10 ayudas diferentes, el número de CC.AA. que aplica cada una de ellas es bajo. En cambio, las medidas que parecen gozar de una mayor “popularidad” entre los gobiernos autonómicos son las destinadas a subvencionar la natalidad.

Centrándonos específicamente en las Comunidades Autónomas, observamos que, de las 60 ayudas de este tipo aplicadas entre todas las autonomías, la que más ayudas concentra es la Comunidad Valenciana con 8, seguida por las 6 de Navarra y País Vasco.

TABLA 4. Prestaciones económicas destinadas a familias con 1 o 2 hijos/as por Comunidades Autónomas.

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. Y LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	P. VASCO
TOTAL		60	2	5	3	1	1	5	2	5	2	4	4	2	2	2	8	6	6
Nacimiento	Nacimiento	11						1	1	1	2		2	1		1	1	1	1
	Nac. Múltiple	9	1	1	1			1		1							1		1
	Nac. 2º hijo y +	2						1				1							
	Nac. población -10.000 habitantes	1		1															
	Nac. población -3.000 hab.	1										1							
Gastos de cuidados	Gastos escuela infantil 0-3	8		1	1		1					1			1	1	1		
	Material escolar	7		1	1	1			1			1			1		1		
	Gastos de alimentación	1																	1
	Gastos prótesis	1																1	
	Integración familiar	1		1															
Conciliación	Cuidado menores	6						1		1			1					1	1
	Cuidado 2 hijos o más	2												1			1		
	Conciliación familiar y laboral	3											1				1	1	
	Conciliación mujeres desempleadas	1						1											
	Reducción jornada o excedencia	2																1	1
	Paternidad	1								1									
	Maternidad	1															1		
	Labores del hogar	1															1		
	Ayuda doméstica	1	1																
	Contratación empleados del hogar	3								1								1	1

Fuente: elaboración propia.

Si analizamos las ayudas desarrolladas en cada una de estas Comunidades Autónomas, observamos que en el caso de Navarra se ofrecen cuantías inferiores a las del País Vasco y se establecen límites de renta para acceder a las ayudas que son superiores a los de la Comunidad Valenciana, por lo que excluimos a Navarra de nuestro análisis comparado y nos centramos exclusivamente en las dos regiones restantes.

De las 8 prestaciones destacas en la Comunidad Valenciana (tabla 5), 6 están destinadas a cualquier familia con algún hijo y 2 son específicas para familias en las que al menos haya dos hijos, siendo una de ellas por nacimiento múltiple, por lo que el requisito de acceso es aún más restrictivo. Lo que no resulta restrictivo es el límite de rentas que se fija para poder acceder a estas ayudas, pues, situando la barrera en 25.000 € anuales, como resultado de la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, en declaración individual, es muy superior a la renta media por persona de la propia Comunidad Autónoma, siendo éste límite equivalente al 255% de los 9.801 € de renta media autonómica. Además, en esta región se oferta, con accesibilidad universal, una deducción fiscal de 270 € por percepción de ayudas a la maternidad, siendo la única autonomía que cuenta con una prestación de este tipo. No obstante, si como hemos podido comprobar, el fuerte de la Comunidad Valenciana sería la cantidad de tipos de ayudas ofertadas, así como su accesibilidad a una amplia parte de la población, estas medidas se ven más debilitadas respecto a otras CC.AA. si hablamos de las cuantías ofertadas. Por lo tanto, podemos determinar que en la Comunidad Valenciana, las familias con 1 o 2 hijos reciben una protección muy extensa pero poco intensa. En este sentido, si bien es la región donde un mayor porcentaje de familias de estas características podría recibir ayudas, no es la región donde las familias con menor poder adquisitivo se encuentren más protegidas.

TABLA 5. Características de las prestaciones económicas destinadas a familias con 1 o 2 hijos/as en la Comunidad Valenciana

	Motivo de la prestación	Cuantía	Renta	
			Individual	Conjunta
1 hijo	Nacimiento	270	25000 € (255%)	40000 €
	Gastos escuela 0-3	15 % máx. 270 €	25000 € (255%)	40000 €
	Material escolar	100 €	25000 € (255%)	40000 €
	Cuidado menores	418 € por hijo 3 – 5 años	25000 € (255%)	40000 €
	Maternidad	270 €	Indiferente	
	Labores del hogar	153 €	25000 € (255%)	40000 €
2 hijos	Nacimiento Múltiple	224 €	25000 € (255%)	40000 €
	Cuidado de 2 hijos o más	10% cuota íntegra autonómica	25000 € (255%)	40000 €

Fuente: elaboración propia.

El País Vasco cuenta con 6 tipos de ayudas destinadas a las familias con 1 o 2 hijos (tabla 6), de las cuales 5 son para cualquier familia con algún hijo y 1 específica para partos múltiples. El País Vasco es un caso atípico en comparación con el resto de Comunidades Autónomas, pues, a pesar de contar con la renta media por persona más alta de toda España, es la Comunidad Autónoma donde existen cuantías más elevadas y una mayor accesibilidad, al no existir un límite de rentas para el acceso a estas ayudas. No obstante, algunas de estas ayudas contemplan incrementos en función de la renta. Las ayudas por nacimiento son de 400 € por hijo por carácter general, 500 € para familias con una renta familiar estandarizada inferior a 30.000 €, lo que es poco más del doble de la renta media por persona de la Comunidad Autónoma y 900 € para familias con una renta familiar estandarizada inferior a 20.000 €, límite que continúa siendo superior, en un 39%, a la renta media autonómica; además, cuando el hijo nacido sea el segundo, existe un segundo pago, determinado por los mismos requisitos y cuantías, cuando éste cumpla un año de edad. De forma parecida, la cuantía mínima por parto múltiple se sitúa en 2.000 € y asciende en base a una serie de ponderaciones en las que se tienen en cuenta las franjas de rentas anteriores y el número de hijos resultantes del parto o adopción múltiple. En esta dinámica, también existe una prestación de 2.795 € anuales con carácter general y 3.325 € para familias con rentas inferiores a 20.000 € por reducción de jornada o excedencia laboral; en el resto del territorio español sólo encontramos una comunidad en la que se oferta una ayuda parecida a ésta, y es Navarra, pero las cuantías ofertadas son muy inferiores. De forma similar, se oferta una ayuda para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de los hijos que cubre el 75,25% de la aportación que legalmente le corresponda al empleador o a la empleadora a la cotización al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, o el 95% en el caso de familias con una renta inferior a 20.000 €. También existe una deducción fiscal por cada descendiente menor de 30 años que conviva en la unidad familiar del progenitor contribuyente, siendo de 585 € anuales por el primero y 724 € anuales por el segundo, incrementándose en 335 € si el hijo que da derecho a la prestación es menor de 6 años. Y, finalmente, encontramos una ayuda por los costes de alimentación de los hijos, y que se presta únicamente en el País Vasco; ésta consiste en una deducción del 15% de las cantidades satisfechas por alimentos a los hijos, siendo la cuantía máxima el 30% del importe correspondiente a la deducción por descendientes y no existiendo límite de acceso por rentas.

En definitiva, por los motivos expuestos, consideramos que el País Vasco es la Comunidad Autónoma que presenta una mayor protección a las familias con 1 y 2 hijos, independientemente de que posean un bajo nivel adquisitivo, pues las cuantías son muy generosas en comparación con el resto de autonomías, o tengan un nivel adquisitivo mayor, por no existir límites de rentas en el acceso a las cuantías mínimas establecidas en cada una de las prestaciones. Además, al contrario de lo que suceden en otras regiones como Aragón, Cantabria o Cataluña, en las que el grueso de las medias están orientadas a subvencionar la natalidad, en el País Vasco existe un buen equilibrio entre ayudas por natalidad, gastos de cuidado y para facilitar la conciliación.

TABLA 6. Características de las prestaciones económicas destinadas a familias con 1 o 2 hijos/as en el País Vasco.

	Motivo de la prestación	Cuantía	Renta
1 hijo	Gastos de alimentación	15%	Indiferente
	Nacimiento	900 €, 500 € o 400 €	<20000 €, <30000 € o indif. (139 %) (208 %)
	Cuidado descendientes < 30 años	585 € o 724 €	Indiferente
	Reducción jornada o excedencia	3325 € o 2795 €	<20000 € o indif. (139 %)
	Contratación empleados del hogar	95% o 75,25%	<20000 € o indif. (139 %)
2 hijos	Nacimiento Múltiple	mín. 2000 €	<20000 €, <30000 € o indif. (139 %) (208 %)

Fuente: elaboración propia.

Las ayudas económicas analizadas, destinadas a familias con 1 o 2 hijos, son la base sobre las que se desarrolla el conjunto de prestaciones al resto de modelos familiares con hijos. Pues todas estas familias cumplen el requisito básico de acceso a las ayudas estudiadas, el tener, al menos, un hijo. A partir de aquí, nos centramos en examinar las ayudas de carácter específico que se añaden a ese marco común de medidas según la configuración y necesidades específicas que presentan cada uno de los tipos de familias con hijos planteados.

Comenzamos con las ayudas económicas destinadas a las familias numerosas (tabla 7). Entre estas, observamos que la Comunidad Valenciana continúa manteniéndose a la cabeza, ahora con 9 medidas, tras incluir una ayuda específica para familias numerosas. Le siguen, con 6 ayudas, Aragón y Castilla y León, que también incorporan una ayuda para familias numerosas, y Navarra y País Vasco, que se mantienen con las 6 ayudas generales expuestas anteriormente. En total, 10 Comunidades autónomas aplican una ayuda específica para las familias numerosas.

Entre las medidas destinadas específicamente a familias numerosas, la Comunidad Valenciana y Castilla y León cuentan con la más popular entre las administraciones autonómicas, una medida concedida con carácter anual en 6 comunidades por el hecho de ser familia numerosa. En la Comunidad Valenciana, esta ayuda consiste en una deducción fiscal de 300 € cuando la renta sea inferior a 25.000 € en declaración individual, o a 40.000 € en declaración conjunta, y en Castilla y León consiste en una deducción de 246 €, independientemente de la renta. Además, Andalucía cuenta con una ayuda similar para familias numerosas en las que al menos dos de los menores de edad que la componen tengan una edad de 3 años o menos. En el caso de Aragón se incluye una ayuda de 500 €, sin límite de rentas, por el nacimiento de cada hijo en una familia numerosa, es decir, a partir del tercero. Y las Islas Baleares, Cataluña y Extremadura conceden ayudas de alquiler a familias numerosas.

TABLA 7. Prestaciones económicas destinadas a familias numerosas por Comunidades Autónomas.

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. Y LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	P. VASCO
	TOTAL	70	2	6	4	2	2	5	3	6	3	5	5	2	2	2	9	6	6
Nacimiento	Nacimiento	12						1	1	1	2		2	1		1	1	1	1
	Nac. Múltiple	8	1	1	1			1		1							1		1
	Nac. 2º +	2						1				1							
	Nac. -10000	1		1															
	Nac. -3000	1										1							
	Nac. 3º hijo y +	1		1															
Gastos de cuidados	Gastos escuela 0-3	7		1	1		1					1			1	1	1		
	Material escolar	6		1	1	1			1			1			1		1		
	Gastos de alimentación	1																	1
	Gastos prótesis	1																1	
	Integración familiar	1		1															
	Alquiler familia numerosa	3				1					1	1							
Conciliación	Cuidado menores	6						1		1			1				1	1	1
	2 hijos o más	2												1			1		
	Conciliación familiar y laboral	2											1					1	
	Conciliación mujeres desempleadas	1						1											
	Reducción jornada o excedencia	2																1	1
	Paternidad	1								1									
	Maternidad	1															1		
	Labores del hogar	1															1		
	Ayuda doméstica	1	1																
	Contratación empleados del hogar	3								1								1	1
	Familia numerosa	5			1		1		1	1			1				1		
	F. num. con 2 o	1	1																

Además de las medidas específicas desarrolladas en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, en Navarra y País Vasco, pese a no presentar medidas de carácter específico, al igual que sucede en otras comunidades, tienen ayudas de carácter general que presentan complementos para las familias numerosas. En el caso de Navarra encontramos una deducción fiscal por descendientes que va incrementando según el número de hijos de la unidad familiar, siendo más beneficioso para las familias numerosas. El primer hijo da derecho a una deducción de 433 €, el segundo a 460 €, en el tercero se da un salto considerable al ascender la deducción a 657 €, el cuarto asciende a 880 €, el 5º a 998 € y el sexto y sucesivos a 1.155 €, no obstante, los límites de acceso son bastante restrictivos, pues las rentas anuales, excluidas las exentas, no deben superar el IPREM, que en 2017 era de 7.519,59 €, que es equivalente al 55,4 % de la renta media por persona en Navarra, es decir, el límite de acceso es un 44,6 % inferior a la renta media de esta comunidad, por lo que consideramos que el acceso es muy limitado. En el caso del País Vasco, la prestación por hijos a cargo otorga mayores ventajas a las familias numerosas. Recordamos que esta prestación consistía en un pago de 400 € por nacimiento, independientemente de la renta, que podía incrementarse a 500 € o 900 € en caso de que la renta no superase los 30.000 € o 20.000 €, respectivamente, y que, en el caso del segundo hijo, existía un pago igual al cumplir éste su primer año de edad. Pues, complementariamente a lo anterior, a partir del tercer hijo, al pago correspondiente por nacimiento se suman 6 pagos más, uno por cada año cumplido hasta los 6 años.

En definitiva, debido a las pocas variaciones observadas entre el número de medidas destinadas a las familias con hijos, en general, y a las familias numerosas, si bien las segundas cuentan con una mayor protección, al verse ésta incrementada en las tres regiones tenidas en cuenta en el análisis anterior, aunque sumándose dos nuevas, continuamos manteniendo las conclusiones obtenidas anteriormente. Por lo tanto, consideramos que la Comunidad Valenciana es la que más número de ayudas oferta a las familias numerosas, siendo en esta ocasión 9, pero que, realmente, debido a su nivel de recursos y universalidad entre las familias numerosas, el País Vasco es la región que, a pesar de contar con 3 menos, ofrece unas ayudas más cuantiosas y accesibles.

Por otra parte, centrándonos ahora en las prestaciones económicas a las que pueden acogerse las familias monoparentales (tabla 8), observamos que tan solo hay dos tipos de ayudas “extra” destinadas específicamente a este modelo familiar. Hablamos de la ayuda para familias monoparentales, disponible en 4 comunidades autónomas y la ayuda para el alquiler para familias monoparentales ofertada en Navarra. Y es que sólo 5 Comunidades Autónomas contemplan una prestación específica para familias monoparentales, la mitad que en el caso de las familias numerosas.

Entre las Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana continúa siendo la que más ayudas ofrece, con 9, pues comparte con las familias monoparentales la ayuda para familias numerosas que hemos expuesto anteriormente. En esta ocasión le sigue Navarra, que incluye una ayuda para el alquiler específica para familias monoparentales en hacinamiento por ingresos insuficientes. El límite de acceso a esta ayuda es de 2,3 veces el IPREM, es decir, 17.295,06 €, y su cuantía es variable en función del número de hijos: cuando la familia monoparental esté compuesta por un hijo, se cubrirá el 60% de la renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y

permanente, con un límite máximo de 4.680 € anuales por vivienda; cuando sean dos hijos, se cubrirá el 70%, con un límite de 5.460 €, y cuando sean tres hijos o más, se cubrirá el 80 %, con un límite de 6.240 €.

TABLA 8. Prestaciones económicas destinadas a familias monoparentales por Comunidades Autónomas.

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. Y LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	P. VASCO
TOTAL		65	3	5	4	1	2	5	2	5	2	4	4	2	2	2	9	7	6
Nacimiento	Nacimiento	12						1	1	1	2		2	1		1	1	1	1
	Nac. Múltiple	8	1	1	1			1		1						1		1	1
	Nac. 2º +	2						1				1							
	Nac. -10000	1		1															
	Nac. -3000	1										1							
	Familia monoparental	4	1		1		1										1		
Gastos de cuidados	Gastos escuela 0-3	7		1	1		1					1			1	1	1		
	Material escolar	7		1	1	1			1			1			1		1		
	Gastos de alimentación	1																	1
	Gastos prótesis	1																1	
	Integración familiar	1		1															
	Alquiler familia monoparental	1																1	
Conciliación	Cuidado menores	6						1		1			1				1	1	1
	2 hijos o más	2												1			1		
	Conciliación familiar y laboral	2											1					1	
	Conciliación mujeres desempleadas	1						1											
	Reducción jornada o excedencia	2																1	1
	Paternidad	1								1									
	Maternidad	1															1		
	Labores del hogar	1															1		
	Ayuda	1	1																

doméstica																	
Contratación empleados del hogar	3								1							1	1

Fuente: elaboración propia.

Aunque Navarra cuenta con una ayuda en el pago del alquiler de la vivienda de las familias monoparentales más vulnerables, analizando su conjunto de medidas, parece continuar siendo una opción menos interesante que la Comunidad Valenciana o el País Vasco. En esta ocasión, si bien el País Vasco no cuenta con ninguna especificidad para familias monoparentales entre sus ayudas, la alta protección que éstas ya ofrecen de por sí en comparación con el resto de autonomías, hace que continúe siendo la región donde este tipo de familias tiene la posibilidad de acogerse a un conjunto de ayudas más sustanciales.

Ahora analizaremos las ayudas económicas a las que pueden acogerse las familias con hijos menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual o superior a 33% (tabla 9). Entre el conjunto de prestaciones autonómicas, observamos que 10 comunidades ofrecen ayudas económicas específicas a estas familias. Entre ellas, Canarias es la única región que cuenta con dos ayudas específicas para familias con hijos menores con dependencia, una por cuidados a hijos con discapacidad y otra por adquisición o adecuación de la vivienda. No obstante, en este territorio las familias con un hijo con dependencia únicamente pueden acogerse a una ayuda más, la de gastos de escuela infantil de primer ciclo (0 a 3 años), por lo que la intensidad protectora que las ayudas económicas que esta autonomía ofrece a este tipo de familias no es elevado en comparación con el resto, donde existen comunidades con un mayor número de ayudas a las que pueden acogerse estas familias. El ejemplo más claro es la Comunidad Valenciana, que, con su ayuda por nacimiento de hijo con discapacidad, sumada al resto de prestaciones a familias con hijos de carácter general, continúa siendo, con 9, la comunidad que mayor número de ayudas ofrece. Le sigue de nuevo Navarra, con 7, y Aragón, Cantabria y País Vasco con 6. Excepto País Vasco, estas comunidades cuentan con una ayuda por cuidados a un hijo con discapacidad.

TABLA 9. Prestaciones económicas destinadas a familias con hijos menores de edad con un grado de discapacidad igual o superior a 33% por Comunidades Autónomas.

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. Y LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	P. VASCO
TOTAL		71	2	6	4	2	3	6	3	5	2	5	5	2	2	3	9	7	6
General	Nacimiento	12						1	1	1	2		2	1		1	1	1	1
	Nac. Múltiple	8	1	1	1			1		1							1		1
	Nac. 2º +	2						1				1							
	Nac. -10000	1		1															
	Nac. -3000	1										1							
	Nac. hijo con	1															1		

	discapacidad																	
Gastos	Gastos escuela 0-3	7		1	1		1				1			1	1	1		
	Material escolar	7		1	1	1			1		1			1		1		
	Gastos de alimentación	1																1
	Gastos prótesis	1															1	
	Integración familiar	1		1														
	Adquisición o adecuación vivienda	3			1		1								1			
Conciliación	Cuidado menores	6					1		1			1				1	1	1
	2 hijos o más	2										1				1		
	Conciliación familiar y laboral	2									1						1	
	Conciliación mujeres desempleadas	1					1											
	Reducción jornada o excedencia	2															1	1
	Paternidad	1							1									
	Maternidad	1														1		
	Labores del hogar	1														1		
	Ayuda doméstica	1	1															
	Contratación empleados del hogar	3							1								1	1
	Cuidados a hijo con discapacidad	7		1		1	1	1	1			1					1	

Fuente: elaboración propia.

Las prestaciones económicas por nacimiento de hijos con discapacidad de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria oscilan entre 100 € y 224 €, limitando la renta de acceso a 25.000 € en declaración individual y 40.000 € en conjunta en la Comunidad Valenciana y no existiendo límite en las otras dos autonomías. En Navarra las cuantías son más generosas, ascendiendo a 605 € por cada hijo con un grado de discapacidad igual o superior a 33 % y 2.118 € si el grado de discapacidad es igual o superior a 65 %. Sin embargo, como ya sucedía con una ayuda de esta comunidad analizada anteriormente, se establece como límite de acceso la condición de que la renta no sea superior al IPREM (7.519, 59 €), por lo que estaríamos hablando de una ayuda con un acceso muy restringido. Finalmente, el País Vasco, en su prestación a familias con hijos a cargo, ofrece un incremento del 100% en las cuantías de esta deducción por

cada hijo menor de 30 años con un grado de discapacidad reconocido igual o superior a 33 %, por lo que la ayuda oscilaría entre 1.170 € y 3.770 € anuales, en función de la renta. Además, esta comunidad autónoma cuenta con una deducción por discapacidad o dependencia del contribuyente, no obstante, ésta no es aplicable a personas menores de 16 años, por el hecho de no estar en edad de tributar.

En definitiva, consideramos que, debido a la extensión e intensidad de las ayudas que el País Vasco cuenta en general para las familias con hijos, que en este caso se complementa con una ayuda muy cuantiosa, en comparación con el resto de Comunidades Autónomas, por el cuidado de hijos con discapacidad, es la comunidad que ofrece unas ayudas económicas con un mayor nivel de protección para este tipo de familias.

Finalmente, vamos a analizar las prestaciones económicas destinadas a familias con personas mayores de 65 años con dependencia o un grado de discapacidad igual o superior a 33% (tabla 10). A diferencia de los casos analizados hasta ahora, en el caso de estas familias la condición básica de acceso a las ayudas no es la convivencia con, al menos, un hijo, sino con una persona mayor de 65 años, por lo que las ayudas que ahora analizamos son totalmente independientes de las estudiadas con los supuestos anteriores. Dicho esto, observamos que entre todas las Comunidades Autónomas se aplica un total de 28 prestaciones económicas destinadas a estas familias, distribuidas entre 14 tipos de ayudas distintas, según nuestra propia catalogación. Entre estas medidas, la más popular entre las distintas administraciones autonómicas es la deducción fiscal a contribuyentes mayores de 65 años con discapacidad, aplicada en 7 comunidades distintas

Las comunidades que más ayudas destinan a este colectivo son Canarias, Navarra y País Vasco, con 5 prestaciones cada una.

TABLA 10. Prestaciones económicas destinadas a familias con personas mayores de 65 años con dependencia o un grado de discapacidad igual o superior a 33% por Comunidades Autónomas.

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. Y LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	P. VASCO
TOTAL		28	4	2	1	2	5	2	4	1	0	1	1	0	0	1	4	5	5
Mayores	Mayor de 65 años	3					1						1						1
	Mayor de 70 años	1		1															
	Mayor de 75 años	4	1						1								1	1	
	Mayor de 65 con discapacidad	7	1			1	1		1	1							1		1
Cuidados a	ascendiente	1																	1
		1																1	

	mayor 65																	
	Cuidados a mayor 70	1					1											
	Cuidados a mayor 75	4	1					1								1	1	
	Ascendiente discapacidad	5				1	1	1	1								1	
	Cuidados mayor 65 discapacidad	2										1					1	
	Cuidados mayor dependiente	1		1														
	Reducción de jornada	2															1	1
Gastos	Asistencia	1	1															
	Gastos de enfermedad	1					1											
	Adquisición /adecuación vivienda	3			1		1							1				
	Contratación cuidadores	1																1

Fuente: elaboración propia.

En Canarias, destaca la accesibilidad de las ayudas, pues el límite de rentas para acceder a las ayudas es de 39.000 € en declaración individual en las deducciones fiscales a contribuyentes con discapacidad, a los mayores de 65 años y a los que están a cargo de familiares dependientes con una discapacidad del 65 % o superior; sin embargo, aunque las cuantías de las ayudas son más altas que en otras CC.AA. (125 €), son inferiores a las de Navarra y País Vasco, que ofrecen deducciones de 300 € y 500 €, respectivamente.

En Navarra destaca la transferencia monetaria de 645,30 € mensuales por motivo de excedencia para el cuidado de familiares adultos de primer grado que requieran cuidados por motivo de accidente o enfermedad grave, independientemente de la renta. También se ofrece una deducción fiscal del 25% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por cotizaciones a la Seguridad Social por el cuidado de familiares, así como el 3,75 % de la base de cotización a la Seguridad Social, como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en el hogar familiar cuidando a personas dependientes. También existen ayudas de 237 € por la convivencia con un ascendiente mayor de 65 años, o 525 € si es mayor de 75 años, y de 605 € por la convivencia de ascendientes con un grado de discapacidad entre 33% y 64%, o de 2.118 € si la persona ascendiente tiene un grado de discapacidad del 65% o superior, no obstante, para acceder a estas ayudas la renta no debe ser superior al IPREM, por lo que la accesibilidad es bastante restringida teniendo en cuenta la renta media de Navarra y en comparación con el resto de Comunidades Autónomas.

Finalmente, en el caso del País Vasco, al igual que hemos visto en Navarra, existe una ayuda en forma de transferencia monetaria por motivo de excedencia laboral para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria. No

obstante, las cuantías ofertadas en el País Vasco son inferiores a las de su comunidad vecina, pues en este caso se ofertan 3.325 € o 2.795 € anuales, en función de si la renta familiar estandarizada supera o no los 20.000 €, aunque en esta comunidad queda contemplada la posibilidad de recibir una proporción de dichas cuantías en caso de reducción de jornada laboral. También encontramos deducciones fiscales por discapacidad o dependencia que oscilan entre los 779 € y los 2.040 € en función del grado de discapacidad o dependencia y la provincia en la que se tribute, y por ser mayor de 65 (334 €) o de 75 años (612 €), siendo su aplicación independiente de la renta. Por lo tanto, debido a que las medidas del País Vasco son menos restrictivas y, en su mayoría, ligeramente superiores a las de Navarra, consideramos que, en general, cuenta con las prestaciones económicas que mayor protección prestan a este colectivo.

6. Conclusiones y recomendaciones

Los profundos cambios socioeconómicos acontecidos en España a raíz de la crisis financiera de 2008 menoscabaron el proyecto de desarrollo de un sistema de protección familiar iniciado apenas unos años atrás. A este contexto de restricción de las políticas sociales, debemos sumar la aparición de nuevos riesgos sociales cuyas consecuencias contribuyen a la construcción de un escenario de desigualdades que dejan de estar sustentadas exclusivamente por factores económicos.

Los nuevos riesgos sociales afectan directamente a la institución familiar, pues es un grupo social básico en la vida de los individuos. Así, las familias desarrollan nuevas necesidades relacionadas con hechos sociales como el paulatino envejecimiento de la población, que trae consigo un incremento de las necesidades de cuidados de las personas ancianas; una transformación de los mercados de trabajo caracterizada por el incremento del desempleo y la precariedad laboral, generando nuevas formas de pobreza y exclusión social; o una evolución de los valores sociales que está favoreciendo la consolidación de nuevos modelos familiares cuyas necesidades se encuentran infrarepresentadas en la agenda política.

A lo largo de esta investigación, hemos analizado la respuesta dada por las políticas públicas a las actuales necesidades sociales de las familias que viven en España. En este sentido, hemos estudiado las medidas desarrolladas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

A nivel nacional, las concesiones de tiempo laboral no parecen conseguir una reducción significativa de las desigualdades de género existentes en el ámbito de los cuidados familiares. La tasa de permisos de maternidad, continúa siendo superior a la de los de paternidad, por no hablar de las escasas transferencias de permisos de maternidad a la figura paterna. Pero especialmente alarmante resulta la profunda feminización de las reducciones de jornada o excedencias laborales por cuidados familiares. Y es que, las políticas de conciliación, por muy loables que resulten sus intenciones, no siempre consiguen asegurar una distribución equitativa de las tareas de cuidados. Ante esta realidad, el apostar por políticas que fomenten una mayor implicación paterna en el cuidado de sus hijos, parece ser la única vía factible para impulsar, desde las políticas de apoyo a las familias, un mayor grado de corresponsabilidad.

Ante las dificultades que los miembros de las familias (mayoritariamente las madres) encuentran para compaginar el cuidado de sus hijos con sus labores profesionales, las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) parecen ser un recurso que facilita la conciliación, además de reforzar el desarrollo cognitivo de los niños. Sin embargo, este recurso se

encuentra actualmente poco desarrollado, ofreciendo una escasa red de centros públicos, por lo que este servicio de apoyo al cuidado y enseñanza de los niños presenta insuficiencias.

La Seguridad Social, también dispone de recursos monetarios para el fomento de la conciliación, no obstante, estas prestaciones atienden nacimientos o adopciones que se dan en condiciones sociofamiliares específicas y acogimientos familiares, pero, realmente, exceptuando los acogimientos, estas ayudas no cubren necesidades de conciliación una vez pasado el momento de ingreso del hijo a la unidad familiar.

Ante la escasa protección económica facilitada por la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas cuentan con competencias para ofrecer apoyo económico a las familias. En este sentido, con el objetivo de determinar cuál es el papel de las Comunidades Autónomas en el refuerzo del marco de políticas nacionales, hemos analizado las prestaciones económicas desarrolladas en cada una de las regiones. Como resultado general de este análisis, hemos constatado que existe una amplia heterogeneidad en el marco de prestaciones autonómicas de apoyo a las familias, lo que ocasiona amplias desigualdades territoriales en la protección social de las familias.

Pero a pesar de las diferencias existentes entre autonomías, podemos apreciar cierta predisposición hacia el desarrollo de algunas fórmulas o medidas específicas. Así, por ejemplo, se aprecia que en torno a un 80% de las ayudas catalogadas se desarrollan en forma de deducción fiscal, esto genera que el sistema de protección de las Comunidades Autónomas esté principalmente orientado a los contribuyentes, lo que puede discriminar a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica en la que sus miembros se encuentren excluidos del mercado laboral o tengan ingresos por debajo del nivel que permite beneficiarse de esas deducciones. Además, estas prestaciones también se centran especialmente en el apoyo a la natalidad o la adopción y el acogimiento familiar, recibiendo las necesidades de conciliación una atención considerablemente menor. De forma parecida, se otorga una mayor protección a los modelos familiares que tradicionalmente se han encontrado más representados en la agenda política, las familias numerosas y en las que alguno de sus miembros tiene una discapacidad, desatendiendo a otras formas de configuración familiar menos consolidadas, como es la monoparentalidad. Esto nos muestra que el Estado de Bienestar español tiene dificultades para adaptarse a los cambios familiares acontecidos en el nuevo contexto social.

Finalmente, si entramos a analizar la disparidad presentada por las Comunidades Autónomas en el desarrollo de prestaciones económicas de apoyo a las familias, observamos que cada región muestra una serie de peculiaridades. Con tal de facilitar la comprensión de las distintas realidades autonómicas, hemos optado por desarrollar un modelo comparativo que nos permita catalogar cada una de las regiones en base a la intensidad de protección que sus prestaciones otorgan a las familias, teniendo en cuenta su nivel de recursos y la accesibilidad. El resultado de este análisis (tabla 11), nos permite clasificar las Comunidades Autónomas según el grado de protección de sus medidas (establecido en relación al marco de prestaciones autonómicas) teniendo en cuenta el nivel de recursos económicos y su grado de accesibilidad. El nivel de recursos lo hemos calculado teniendo en cuenta el número de prestaciones familiares existentes en cada región y las cuantías, en euros, que éstas ofrecen. La accesibilidad la calculamos teniendo en cuenta el número de medidas generales, entendidas éstas como las que las únicas condiciones son el tener al menos un hijo y encontrarse dentro del

margen de renta exigido, y si el límite de rentas que excluye del acceso a la prestación es superior o inferior a la renta media de esta Comunidad Autónoma. En color verde señalamos los niveles de recursos o accesibilidad que resultan más favorables para las familias y en rojo las que son menos favorables. La contabilización de las condiciones más favorables y menos favorables nos permite establecer si el nivel de protección es alto, medio o bajo y si, dentro de este nivel de protección, el modelo corresponde con un nivel de recursos alto (N+), intermedio (Ni) o bajo (N-) y una accesibilidad alta (A+), intermedia (Ai) o baja (A-).

TABLA 11. Comparación del nivel de protección de las prestaciones económicas autonómicas de apoyo a las familias.

	Nivel de Protección	Modelo	Nivel de recursos		Accesibilidad	
			Número de medidas	cuantía económica	Número de medidas generales	Límite de acceso (sobre renta media)
ANDALUCÍA	BAJO	G-, Ai	3	baja	1	alto
ARAGÓN	ALTO	Gi, A+	7	baja	3	alto
P. ASTURIAS	MEDIO	Gi, Ai	6	baja	2	alto
I. BALEARES	BAJO	G-, A-	3	baja	1	bajo
CANARIAS	BAJO	G-, Ai	5	baja	1	alto
CANTABRIA	ALTO	Gi, A+	6	baja	4	alto
C. LA MANCHA	BAJO	G-, Ai	4	baja	2	alto
C. LEÓN	ALTO	Gi, A+	6	baja	4	alto
CATALUÑA	BAJO	G-, Ai	3	baja	2	alto
EXTREMADURA	ALTO	Gi, A+	6	baja	3	alto
GALICIA	ALTO	Gi, A+	6	baja	4	alto
C. MADRID	BAJO	G-, Ai	2	baja	2	alto
R. MURCIA	BAJO	G-, Ai	2	baja	2	alto
LA RIOJA	BAJO	G-, Ai	3	baja	2	alto
C. VALENCIANA	ALTO	Gi, A+	11	baja	7	alto
NAVARRA	ALTO	G+, Ai	8	alta	6	muy bajo
P. VASCO	ALTO	G+, A+	6	alta	5	muy alto

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de nuestro análisis nos indican que el País Vasco cuenta con el nivel de protección más alto, con un alto nivel de recursos y una amplia accesibilidad. También con un nivel de protección alto y un modelo similar, encontraríamos a Navarra, que mantiene un nivel de recursos alto pero se diferencia por contar con una accesibilidad intermedia. Con un modelo distinto, más centrado en la accesibilidad, a costa de reducir el nivel de recursos, encontramos otras Comunidades Autónomas con un nivel de protección alto, hablamos de la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y Aragón. En un nivel intermedio se encuentra el Principado de Asturias, con un número considerable de medidas, aunque con bajas cuantías y condiciones de acceso muy específicas, y un límite de acceso superior a la renta media autonómica. Con un nivel de protección bajo, siguiendo un modelo de escaso nivel de recursos y accesibilidad intermedia, encontramos a Castilla-La Mancha,

Canarias, Cataluña, La Rioja, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y Andalucía. Finalmente, la región con un menor nivel de protección es Islas Baleares, que cuenta con un conjunto de ayudas económicamente escasas y con una baja accesibilidad.

En definitiva, podemos concluir que cada Comunidad Autónoma aplica unas fórmulas distintas jugando con el equilibrio entre el nivel de recursos y la accesibilidad de sus ayudas. Este análisis podría complementarse incorporando un mayor número de variables que nos permitiesen valorar la equidad del sistema de protección familiar de cada una de las autonomías, el peso ideológico que se esconde detrás de cada medida, la influencia de la disponibilidad presupuestaria sobre la configuración de los diferentes modelos o el impacto social de estas políticas en cada una de las Comunidades Autónomas.

7. Bibliografía

- AGENCIA TRIBUTARIA (2018): *Manual práctico: renta 2017*. Ministerio de Hacienda y función pública. Recuperado de https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/Biblioteca_Virtual/Manuales_practicos/Renta/ManualRentaPatri monio2017_es_es.pdf
- ALBERDI, I. (1999): *La nueva familia española*. Barcelona: Taurus.1
- (2014): “El retraso de la procreación y el mantenimiento de la juventud”. *Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud*, 0: 9-25.
- ALMEDA, E.; CAMPS, C.; DI NELLA, D y ORTIZ, R. (2016): “Familias monoparentales, inclusión y comunidad”, *Arxius de Ciències Socials*, 34: pp. 59-78.
- BAIZÁN, P.; ARPINO, B. y DELCLÒS, C. E. (2013): “Políticas públicas, valores de género y fecundidad en Europa” en Gøsta Esping-Andersen (coord.) *El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso Español*. Barcelona: Obra Social “la Caixa” (Colección de Estudios Sociales). 177-196.
- BARAÑANO CID, M. y DE LA PAZ, J. (1999): “Pluralización y modernidad de los hogares y las formas familiares: hacia la familia postradicional” en S. González Ortega (coord.) *Seguridad Social y familia*. Madrid: La Ley-Instituto de Seguridad Social Juan Vives, Universidad Carlos III.
- BARRÓN LÓPEZ, S. (2002): “Familias monoparentales: un ejercicio de clarificación conceptual y sociológica”, *Revista del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales*, 40: pp. 13-30.
- BUSTELO, M. y PETERSON, E. (2005): “Conciliación y (des)igualdad. Una mirada debajo de la alfombra de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres”. *Revista de Desarrollo y Educación Popular*, 7: 32-37.
- BONOLI, G. (2007): “Time matters. Postindustrialisation, new social risk and welfare state adaptation in advanced industrial democracies”. *Comparative Political Studies*, 40: 495-520.
- CANTÓ, O. (2011): “El impacto de las políticas públicas monetarias en la infancia” en L. Gaitán, O. Cantó y B. Leyra: *Las Políticas Públicas y la Infancia en España: evolución, impactos y percepciones*. Madrid: UNICEF España. 28-44.
- CANTÓ, O.; AYALA, L.; ADIEGO, M.; LEVY, H. y PANIAGUA, M. M. (2012): “Going regional. The effectiveness of different tx policies in comating child poverty in Spain”. *EUROMOD Working Paper*, EM 2/2012.
- CATALÁN, M. y GARROTE, A. (2012): “Revisión de los cuidados informales. Descubriendo al cuidador principal”. *NURE Inv*, 9 (57): 1-12.

- CEA D'ANCONA, M. A. (2009): "La sociedad española ante los nuevos modelos de familia". *Panorama Social*, 10: 8-22.
- ELIZALDE SAN MIGUEL, B.; DÍAZ GANDASEGUI, V. y DÍAZ GORFINKEL, M. (2015): "Crisis y estado de bienestar en el cuidado de menores: reflexiones conceptuales a partir de un estudio comparado de España y Noruega". *Revista de Economía Crítica*, 20: 120-134.
- EQUIPO NORSPAR (2015): "Los nuevos riesgos sociales y las reformas del Estado de Bienestar" en Francisco Javier Moreno Fuentes y Eloísa del Pino Matute (coord.) *Desafíos del Estado de Bienestar en Noruega y España. Nuevas políticas para atender a Nuevos Riesgos Sociales*. Madrid: Tecnos. 11-29.
- ESPING-ANDERSEN, G. (2002): *Why we need a new Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- ESTRADA, M.E., GIL, A.I., GIL, M. y VIÑAS, A. (2018): "La dependencia: efectos en la salud familiar". *Atención Primaria*, 50: 23-34.
- LLANO ORTIZ, J. C. (2018): *El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 - 2017*. Madrid: European Anti Poverty Network – España.
- FERRARA, M. (1996): "The 'Southern Model' of welfare in social Europe". *Journal of European Social Policy*, 6 (1): 17-37.
- FLAQUER, LL. (2000): *Las políticas familiares en una perspectiva comparada*. Barcelona: Fundación "la Caixa" (Colección de Estudios Sociales).
- GARCÍA, M.; MATEO, I. y MAROTO, G. (2004): "El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las mujeres". *Gaceta Sanitaria*, 18: 83-92.
- GUILLÉN, A. y ÁLVAREZ, S. (2004): "The OECD and the reformulation of Spanish social policy: a combined search for expansion and rationalisation", en K. Armingeon y M. Beyeler (eds.) *The OECD and European Welfare States*. Cheltenham: Edward Elgar. 183-196.
- IGLESIAS DE USSEL, J. y MARÍ-KLOSE, P. (2011): "La familia española en el siglo XXI: Los retos del cambio social", en Francisco Chacón y Joan Bestard (coords.) *Familias: historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días)*. Madrid: Cátedra. 1001-1124.
- LA PARRA, D. (2002). *La atención a la salud en el hogar: desigualdades y tendencias*. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
- LAPUERTA, I. (2013): "¿Influyen las políticas autonómicas en la utilización de la excedencia por cuidado de hijos?". *Reis*, 141: 29-60.
- LÓPEZ VISO, M. y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A. F. (2013): "Políticas de dependencia. Vuelta a los cuidados informales y al régimen de bienestar familista". En Alessandro Gentile (coord.) *Actas del IV Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). "Las políticas sociales entre crisis y post-crisis"*. Madrid: Universidad de Alcalá. 913-926.

- MARÍ-KLOSE, P. y MORENO-FUENTES, F. J. (2013): "The Southern European Welfare Model in the Postindustrial Order: Still a Distinctive Cluster". *European Societies*, 15 (4): 475-492.
- MARÍ-KLOSE, P. (2015a): "Un Estado que favorece la desigualdad", en *Revista Contexto*, nº5. Recuperado de <http://ctxt.es/es/20150212/politica/320/Pobreza-Desigualdad-Recortes-Estado-de-bienestar-prestaciones-sociales.htm>
- MARÍ-KLOSE, P. (2015b): "Familia y género en el sistema de bienestar español", en F. J. MORENO Fuentes y E. del Pino (coords.) *Desafíos del Estado de Bienestar en Noruega y España. Nuevas políticas para atender nuevos riesgos sociales*. Madrid: Tecnos. 105-132.
- MASANET, E. y LA PARRA, D. (2009): "Los impactos de las cuidados de salud en los ámbitos de vida de las personas cuidadoras". *Revista Española de Sociología*, 11: 13-37.
- MEIL LANDERLIN, G. (2006): "The Evolution of Family Policy in Spain", *Marriage and Family Review*, 39 (3-4): 359-380.
- MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (2018): *Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2018*. Recuperado de <https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiaayudasfamilias.pdf>
- MORENO, L. (2013): *La Europa asocial*. Barcelona: Península.
- MORENO, L.; DEL PINO, E.; MARÍ-KLOSE, P. y MORENO-FUENTES, F.J. (2014): *Los sistemas de bienestar europeos tras la crisis económica*. Colección Estudios nº 3. Madrid: EUROsociAL.
- MORENO, L. y MARÍ-KLOSE, P. (2016): "Bienestar mediterráneo: trayectorias y retos de un régimen en transición" en Eloísa del Pino y Mª Josefa Rubio Lara (coord.) *Los estados de bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada*. Madrid: Tecnos. 139-160.
- MORRIS, M. (2001): *Gender-sensitive home and community care and caregiving research: a synthesis paper*. Group of Health Care Reform and Women, Health Canada. Recuperado de: <http://www.womenandhealthcarereform.ca/publications/synthesis.pdf>
- PATÓN CASAS, J. M. (2007): "Emancipación juvenil y políticas de vivienda en Europa". *Arquitectura, Ciudad y Entorno*, 5: 523-554.
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado, 24 de octubre de 2015 (modificado el 4 de julio de 2018). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430#ddunica>
- ROIGÉ, X. (2011): "De la Restauración al franquismo. Modelos y prácticas familiares", en F. Chacón y J. Bestard (coords.): *Familias. Historia de la Sociedad Española*. Madrid: Cátedra. 667-740.

- SALIDO, O. y ARRIBA, A. (2005): “Políticas a favor de las mujeres: igualdad de oportunidades y conciliación familiar y laboral”, en Gregorio Rodríguez Cabrero. Ana Arriba, Vicente Marbán y Olga Salido, *Actores Sociales y Reformas del Bienestar*. Madrid: CSIC (Colección Politeya). 145-184.
- SALIDO, O. y MORENO, L. (2007): “Bienestar y políticas familiares en España”. *Política y Sociedad*, vol. 44 (2): 101-114.
- (2009): “Familia y género”, en L. Moreno (ed.) *Reformas de las Políticas de Bienestar en España*. Madrid: Siglo XXI.
- SASTRE, A. (2015): *Más solas que nunca. La pobreza infantil en familias monomarentales*. País Vasco: Save the Children España.
- SON, K., PARK, S., LEE, C., CHOI, G., LEE, D., et al. (2011): “Behavioral risk factors and use of preventive screening services amongspousal caregivers of cancer patients”. *Support Care Cancer*, 19: 919-927.
- VALIENTE, C. (1995): “Rejecting the Past: Central Government and Family Policy in Post-Authoritarian Spain (1975-94)”, en Linda Hantrais y Marie-Therée Letablier (eds.), *The Family in Social Policy and Family Policy*. Loughborough: University of Loughborough, Cross-National Research Papers. 80-96.
- VALLES, M. S. (1997): *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid: Síntesis.

Bases de datos consultadas

Instituto Nacional de Estadística

- Censo de Población y Viviendas. Recuperado de <http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/hogares/p01/10/&file=01011.px&L=0>
- Encuesta de condiciones de vida. Recuperado de <http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9947&L=0>
- Encuesta de Población Activa. Recuperado de <http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4181>

Instituto Nacional de la Seguridad Social.

- Prestaciones por maternidad (enero - diciembre 2017). Recuperado de <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST169>
- Prestaciones por paternidad (enero – diciembre 2017). Recuperado de <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST247>

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

- Alumnado matriculado en Educación Infantil por titularidad, edad, ciclo y sexo. Recuperado de <http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/2016-2017RD/RGInfantil//10/&file=Infantil2.px&type=pcaxis&L=0>
- Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad/financiación del centro, comunidad autónoma/provincia y enseñanza. Recuperado de <http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Centros/Centrosyunid/RD2016-2017/RegGen//10/&file=RDRG02.px&type=pcaxis&L=0>

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

- Excedencias por cuidado de hijos/as. Recuperado de <http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm>

8. Anexos

ANEXO 1. Tabla de recopilación de las deducciones fiscales destinadas al apoyo a las familias por CC.AA. según población destinataria y necesidad que se pretende cubrir.

Infancia y familia	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	PAÍS VASCO
NACIMIENTO/ADOPCIÓN	9					1		1	1	1		1	1		1	1	1	
ACOGIMIENTO FAMILIAR MENORES	8			1		1		1			1	1	1		1	1		
GASTOS CENTRO / ESCUELA INFANTIL (0 - 3 AÑOS)	7		1	1		1					1			1	1	1		
FAMILIA NUMEROSA	6			1		1		1	1			1				1		
ADQUISICIÓN LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR	6			1	1			1			1			1		1		
ADOPCIÓN INTERNACIONAL	5	1	1	1									1				1	
FAMILIA MONOPARENTAL	4	1		1		1										1		
ALQUILER VIVIENDA FAMILIA NUMEROSA	3				1					1	1							
GASTOS EXTRAESCOLARES APRENDIZAJE IDIOMAS	3				1			1					1					
NACIMIENTO/ADOPCIÓN MÚLTIPLE	3			1					1							1		
CUIDADO HIJOS MENORES 3 AÑOS	2						1										1	
DESPLAZAMIENTO POR ESTUDIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	2				1	1												
GASTOS DE ESTUDIOS (NO UNIVERSITARIOS)	2					1							1					
NACIMIENTO MÚLTIPLE	2		1								1							
ADOPCIÓN (GASTOS DE)	1								1									
BENEFICIARIOS AYUDAS FAMILIARES	1	1																
CONCILIACIÓN FAMILIAR/LABORAL	1															1		
CONTRIBUYENTES CON DESCENDIENTES (CONVIVIENDO)	1																	1

CONTRIBUYENTES CON 2 DESCENDIENTES O MÁS	1															1		
CUIDADO FAMILIARES	1																1	
CUIDADO FAMILIARES DISCAPACIDAD	1									1								
CUIDADO HIJOS MENORES	1										1							
CUIDADO HIJOS MENORES 4 AÑOS	1							1										
CUSTODIA DE HIJOS O ACOGIDOS MENORES DE 3 AÑOS	1															1		
DONACIÓN A HIJOS PARA ADQUISICIÓN/REHABILITACIÓN 1ª VIVIENDA	1					1												
FAMILIAS CON MÁS DE 2 DESCENDIENTES E INGRESOS REDUCIDOS	1												1					
GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS HIJOS	1																	1
INTERESES PRÉSTAMOS PARA MÁSTER Y DOCTORADO	1									1								
NACIMIENTO/ADOPCIÓN 1er ó 2º HIJO EN POBLACIÓN CON MENOS DE 10.000 HABITANTES	1		1															
NACIMIENTO/ADOPCIÓN 3er HIJO y +	1		1															
NACIMIENTO/ADOPCIÓN HIJO DISCAPACIDAD	1															1		
PATERNIDAD	1								1									
PERCEPCIÓN AYUDAS MATERNIDAD	1															1		
TOTAL		3	5	7	4	8	1	5	6	3	6	4	6	2	3	1 2	4	2
Mayores 65 y más años	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	PAÍS VASCO
CONTRIBUYENTES MAYORES 65 AÑOS	3					1						1						1
CONTRIBUYENTES MAYORES 70 AÑOS	1		1															
CONTRIBUYENTES MAYORES 75 AÑOS	2							1										1
CUIDADO ASCENDIENTES	1																	1

CUIDADO ASCENDIENTES MAYORES 65 AÑOS	1																1	
CUIDADO ASCENDIENTES MAYORES 70 AÑOS	1						1											
CUIDADO ASCENDIENTES MAYORES 75 AÑOS	4	1						1								1	1	
ACOGIMIENTO MAYORES DE 65 AÑOS	3			1				1		0			1					
TOTAL		1	1	1	0	1	1	3	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3
Discapacidad y enfermedad	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	PAÍS VASCO
DISCAPACIDAD (CONTRIBUYENTE MAYOR 65 AÑOS)	1															1		
DISCAPACIDAD (CONTRIBUYENTE)	7	1			1	1		1	1							1		1
DISCAPACIDAD (CÓNYUGE O PAREJA)	1	1																
DISCAPACIDAD (HIJOS)	1		1															
DISCAPACIDAD (MIEMBRO UNIDAD FAMILIAR)	3				1	1	1											
DISCAPACIDAD (NECESIDAD DE AYUDA DE 3as PERSONAS)	1											1						
DISCAPACIDAD ASCENDIENTES O DESCENDIENTES	2							1									1	
ADQUISICIÓN/ADECUACIÓN VIVIENDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3			1		1									1			
ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1																
CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYORES 65 AÑOS	1															1		
CUIDADO PERSONAS DEPENDIENTES	1		1															
GASTOS DE ENFERMEDAD	1					1												
ACOGIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2							1					1					
TOTAL		3	2	1	2	4	1	2	1	0	0	1	0	0	1	3	1	1

Otros	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	PAÍS VASCO
POR CUOTAS A LA SS. DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1								1									
VIUDEDAD CONTRIBUYENTE	1										1							
LABORES NO REMUNERADAS EN EL HOGAR	1															1		
AYUDA DOMÉSTICA	1	1																
TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Fuente: elaboración propia.

Anexo 2. Tabla de recopilación de las transferencias monetarias destinadas al apoyo a las familias por CC.AA. según población destinataria y necesidad que se pretende cubrir.

Infancia y familia	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	P. VASCO
ACOGIMIENTO FAMILIAR	6	1				1				1		1		1		1		
NACIMIENTO/ADOPCIÓN MÚLTIPLE	4	1	1				1											1
NACIMIENTO ADOPCIÓN 2º HIJO O MÁS	2						1				1							
NACIMIENTO/ADOPCIÓN	2									1		1						
POR REDUCCIÓN JORNADA O EXCEDENCIA PARA CUIDADOS HIJOS	2																1	1
ACOGIMIENTO FAMILIAR (FAMILIA EXTENSA)	1			1														
ACOGIMIENTO FAMILIAR (GASTOS SANITARIOS)	1															1		
ADOPCIÓN INTERNACIONAL	1																	1
ALQUILER VIVIENDA (FAMILIAS MONOPARENTALES CON INGRESOS INSUFICIENTES)	1																1	
AUTONOMÍA PERSONAL TRAS PROTECCIÓN DE MENORES	1				1													
CONCILIACIÓN (FAMILIAS SITUACIONES ESPECIALES)	1																1	
CONCILIACIÓN (HIJOS MENORES 12 AÑOS)	1											1						
CONCILIACIÓN MUJERES DESEMPLEADAS CON HIJOS	1						1											
FAMILIAS NUMEROSAS	1							1										
FAMILIAS NUMEROSAS CON 2 O MÁS MENORES 3 AÑOS	1	1																
GASTOS DE PRÓTESIS AUDITIVAS, PRESCRIPCIONES ÓPTICAS, ORTOPEDIA Y ORTODONCIA (FAMILIAS NUMEROSAS)	1																1	
HIJOS MENORES 3 AÑOS	1											1						

INTEGRACIÓN FAMILIAR	1		1															
NACIMIENTO/ADOPCION (-3000 HABITANTES)	1										1							
POR HIJOS A CARGO	1																	1
TOTAL		3	2	1	1	1	3	1	0	2	2	4	0	1	0	2	4	4
Discapacidad y enfermedad	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	P. ASTURIAS	I. BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C. LA MANCHA	C. LEÓN	CATALUÑA	EXTREMADURA	GALICIA	C. MADRID	R. MURCIA	LA RIOJA	C. VALENCIANA	NAVARRA	P. VASCO
DISCAPACIDAD (HIJO)	1						1											
PARA CONTRATACIÓN CUIDADORES	1																	1
POR REDUCCIÓN JORNADA O EXCEDENCIA PARA CUIDADOS FAMILIARES DEPENDIENTES	2																1	1
TOTAL		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Fuente: elaboración propia.